

RESUMEN EJECUTIVO

# Hacia la transformación

aliarse.org

Capacidades de  
Participación y Acción  
para la Agenda 2030  
en Brasil, Colombia,  
Costa Rica, Jamaica  
y Perú.

Mapeo de partes interesadas para la  
implementación de la Agenda 2030,  
planes de acción nacionales y  
vías de transformación.

Julio 2025

# Agradecimiento

Las autoras desean expresar su profundo reconocimiento a las personas colaboradoras de Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica y Perú que contribuyeron al desarrollo de este estudio. Los aportes, compromiso y disponibilidad de los actores del sector estatal y no estatal resultaron fundamentales para la elaboración de los perfiles presentados. Asimismo, se reconoce el valioso acompañamiento conceptual y técnico de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

## El más profundo agradecimiento a:

Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED). *Costa Rica*  
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). *Colombia*  
Centro de los ODS de la Universidad de los Andes (CODS). *Colombia*  
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). *Perú*  
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). *Perú*  
Consorcio de Investigación Económica y Social y la Universidad del Pacífico (CIES). *Perú*  
Council of Voluntary Social Services. *Jamaica*  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Colombia*  
Departamento Nacional de Planeación (DNP). *Colombia*  
Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). *Brasil*  
Fundación Corona. *Colombia*  
Instituto Brasileño de Ciencias Estadísticas (IBGE). *Brasil*  
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). *Costa Rica*  
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). *Brasil*  
Jamaica Vision 2030 Secretariat. *Jamaica*  
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). *Perú*  
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). *Costa Rica*  
Universidad de Brasilia. *Brasil*  
Ministry of Local Government and Community Development. *Jamaica*  
Municipalidad de Heredia. *Costa Rica*  
Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica  
Perú Sostenible. *Perú*  
Planning Institute of Jamaica (PIOJ). *Jamaica*  
Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil. *Costa Rica*  
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). *Brasil*  
Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV). *Colombia*  
Secretaría General de la Presidencia de la República. *Brasil*  
University of West Indies. *Jamaica*  
Se agradece a Cristina Luttner por su apoyo en la realización de las entrevistas en portugués.

# Créditos



La investigación fue realizada por la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad-Aliarse, promovida por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, con financiamiento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN)\* en el marco de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI).

**Autores** Danielle Jean-Pierre Figueroa  
Duraymi Huete Chávez  
Fundación Aliarse

**Filóloga** Paola Canessa Fernández

**Diseño** Epoq Studio

## Créditos de imágenes:

Portada: Unsplash / Will Turner; p.6: Unsplash / Ilham Fikri; p.8: Unsplash / Mauro Lima; p.9: Unsplash / Jaume Galofre; p.10: Unsplash / F Cary Snyder; p.12: Unsplash / Marcos Paulo; p.13: Unsplash / Matheus Oliveira ; p.15: Unsplash / Jan Kronies; p.18: Unsplash / Ricardo Gomez; p.19: Unsplash / Nestor Morales; p.21: Unsplash / Sheldon Martineau; p.23: Unsplash / Adrian Valverde; p.14: Unsplash / Lloyd Blunk; p.27: Unsplash / Intyauud Banton; p.29: Unsplash / Marc Babin; p.31: Unsplash / Caspar Rae; p.34: Unsplash / Persnickety Prints; p.35: Unsplash / Seiji Seiji; p.36: Unsplash / Paul Lequay; p.38: Unsplash / Mckayla Crump; p.39: Unsplash / Adrian Dascal; p.41: Unsplash / Vlad Kutepov.

## \*BMUKN:

Antes Ministerio Federal de Medio Ambiente,  
Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y  
Protección al Consumidor (BMUV)



# Índice

|   |                                                                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ● | Una mirada a la región                                                                                   | 6  |
| ● | 1. Brasil                                                                                                | 8  |
|   | 1.1 Gobernanza para la sostenibilidad y la acción climática con justicia social e igualdad étnico-racial | 9  |
|   | 1.2 Del compromiso a la corresponsabilidad: actores no estatales en la implementación de los ODS         | 11 |
|   | 1.3 Tendencias, desafíos y recomendaciones                                                               | 12 |
|   | 1.4 Mapa de plataformas y organizaciones clave de Brasil                                                 | 14 |
| ● | 2. Colombia                                                                                              | 15 |
|   | 2.1 Gobernanza para la sostenibilidad y la acción climática en un entorno de paz                         | 16 |
|   | 2.2 Del compromiso a la corresponsabilidad: actores no estatales en la implementación de los ODS         | 17 |
|   | 2.3 Tendencias, desafíos y recomendaciones                                                               | 18 |
|   | 2.4 Mapa de plataformas y organizaciones clave de Colombia                                               | 20 |
| ● | 3. Costa Rica                                                                                            | 21 |
|   | 3.1 Gobernanza para la sostenibilidad y la acción climática desde un pacto nacional multisectorial       | 22 |
|   | 3.2 Del compromiso a la corresponsabilidad: actores no estatales en la implementación de los ODS         | 23 |
|   | 3.3 Tendencias, desafíos y recomendaciones                                                               | 25 |
|   | 3.4 Mapa de plataformas y organizaciones clave de Costa Rica                                             | 26 |



|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Jamaica</b>                                                                                | <b>27</b> |
| 4.1 Gobernanza para la sostenibilidad y la acción climática en un entorno de resiliencia insular | 28        |
| 4.2 Del compromiso a la corresponsabilidad: actores no estatales en la implementación de los ODS | 30        |
| 4.3 Tendencias, desafíos y recomendaciones                                                       | 31        |
| 4.4 Mapa de plataformas y organizaciones clave de Jamaica                                        | 33        |
| <b>5. Perú</b>                                                                                   | <b>34</b> |
| 5.1 Gobernanza para la sostenibilidad y la acción climática en un entorno político cambiante     | 35        |
| 5.2 Del compromiso a la corresponsabilidad: actores no estatales en la implementación de los ODS | 37        |
| 5.3 Tendencias, desafíos y recomendaciones                                                       | 38        |
| 5.4 Mapa de plataformas y organizaciones clave de Perú                                           | 40        |
| <b>Reflexiones sobre retos y recomendaciones en la región</b>                                    | <b>41</b> |



# Una mirada a la Región

A cinco años del plazo establecido para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los avances en América Latina y el Caribe distan de lo esperado. No obstante, la región mantiene un compromiso sostenido con la Agenda 2030.

El estudio regional identifica mecanismos de participación, como plataformas multisectoriales y organizaciones sombrilla, y examina también a los actores clave que impulsan la aceleración de los ODS en los niveles nacional y subnacional. Además, presenta el contexto multilateral, los distintos instrumentos de política pública para el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad, así como los principales desafíos y las recomendaciones para enfrentarlos. A partir de fuentes primarias y secundarias, el estudio no busca ser exhaustivo, sino servir como una base inspiradora para que los países de la región fortalezcan sus capacidades institucionales, avancen en el cumplimiento de la Agenda 2030 y construyan nuevas alianzas transformadoras.

Estos mecanismos de participación son espacios estructurados que articulan a actores de distintos sectores, coordinan acciones, comparten información y construyen consensos. Cumplen funciones consultivas, deliberativas, de implementación y de participación en procesos clave, como los Informes Nacionales Voluntarios (INV) y los Informes Locales Voluntarios (ILV). Gracias a sus capacidades, estos organismos se constituyen en piezas clave para la gobernanza de la sostenibilidad.

Los Estados de la región han avanzado en la consolidación de un enfoque de toda la sociedad, evidenciado en la institucionalización de espacios multisectoriales dentro de los mecanismos oficiales de gobernanza de la Agenda 2030. A nivel subnacional, se destacan progresos en la territorialización de los ODS, como la elaboración de ILV, el fortalecimiento de redes municipales y la integración de los ODS en planes de desarrollo, especialmente en Brasil, Colombia y Costa Rica. Sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por la débil coordinación multinivel, que restringe la incidencia de las acciones locales en los resultados nacionales y dificulta la incorporación de las prioridades territoriales en las políticas nacionales. Persisten, además, brechas en capacidades técnicas, estadísticas y financieras que obstaculizan una implementación equitativa.

Los países de la región también avanzan en la alineación con las agendas multilaterales, evidenciando áreas de convergencia entre la Agenda 2030 y otros marcos globales clave, como el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad. Para consolidar estas sinergias, es fundamental integrarlas en los marcos normativos e instrumentos de planificación nacionales, fortalecer la gobernanza intersectorial, alinear los objetivos globales con las prioridades locales y generar condiciones habilitantes que traduzcan los compromisos en acciones sostenibles e inclusivas.

La implementación efectiva de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe requiere ampliar la capacidad de generación de alianzas a nivel nacional y regional. Existen ventanas de oportunidad como el liderazgo de Brasil en el G20 y la COP30, la cooperación caribeña a través de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible y la Comunidad de Práctica de la CEPAL sobre los Informes Nacionales Voluntarios para los países de América Latina y el Caribe. Potenciar estas plataformas como mecanismos permanentes de intercambio técnico y político facilitará el aprendizaje mutuo, la construcción de posicionamientos comunes y una mayor capacidad de incidencia colectiva en la agenda internacional para la sostenibilidad.





# Brasil

Brasil reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que promueve la justicia social y la igualdad étnico-racial. Tras un periodo de retroceso institucional que debilitó importantes avances en estas áreas, el país retoma un liderazgo activo, fortaleciendo su estructura institucional nacional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y posicionándose como un actor clave en foros estratégicos como el G20<sup>1</sup> y la COP30<sup>2</sup>. Desde estos espacios, impulsa una agenda ambiciosa y coherente con la Agenda 2030, reafirmando su compromiso con un futuro más justo, inclusivo y ambientalmente responsable.

1 El G20 (Grupo de los Veinte) es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, que reúne a las principales economías del mundo para abordar desafíos globales: <https://www.g20.org>

2 La COP30 es la 30ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC, donde países de todo el mundo se reunirán en 2025 en Brasil para avanzar en los compromisos contra el cambio climático: <https://cop30.br/es>



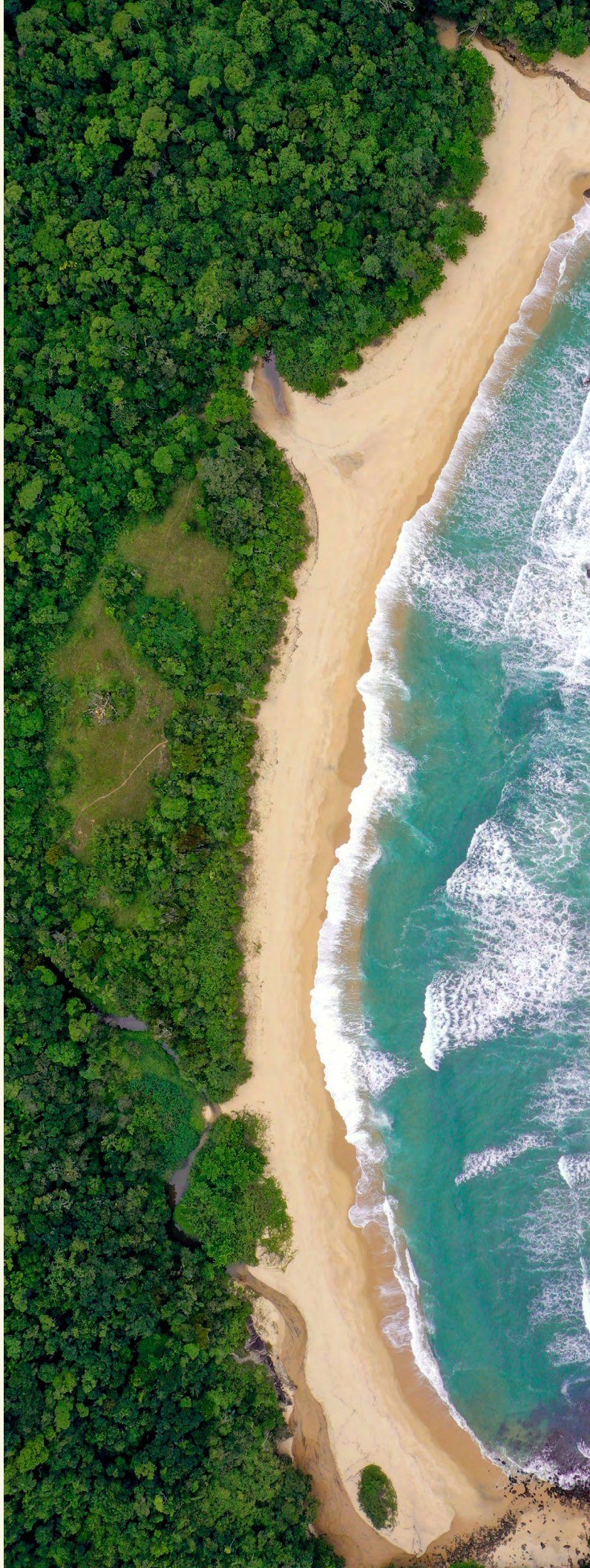


## 1.1 GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA CON JUSTICIA SOCIAL E IGUALDAD ÉTNICO-RACIAL

Brasil ha consolidado una arquitectura institucional orientada a la sostenibilidad, que articula la Agenda 2030 con la justicia social, la transición ecológica y la igualdad étnico-racial. En 2023, el país inicia una fase de reactivación del compromiso con los ODS, marcada por la reinstalación de la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CNODS), en la Secretaría General de la Presidencia de la República, a través del Decreto N.º 11.704/2023, que permite restaurar un espacio de participación social paritario y fortalecer la coordinación intergubernamental y multisectorial. La CNODS<sup>3</sup> reúne a 42 representantes gubernamentales —incluidos ministerios, gobiernos locales y entidades técnicas— y a 42 representantes de la sociedad civil. Su mandato abarca desde la formulación de políticas públicas hasta el seguimiento del avance en el cumplimiento de los ODS, respaldado por instituciones técnicas como el Instituto Brasileño de Estadística y Ciencias (IBGE), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y la Fundación Oswaldo Cruz.

El país ha presentado dos Informes Nacionales Voluntarios (2017 y 2024), siendo este último el resultado de un amplio proceso participativo con actores públicos, privados y sociales. En paralelo, el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, mediante el despliegue de iniciativas como la Plataforma ODS Brasil, ha permitido avanzar en la adaptación de indicadores a realidades territoriales y poblacionales, con énfasis en los sectores más vulnerables. A nivel subnacional, se observa un proceso activo de territorialización de la agenda: más de diez Informes Locales Voluntarios han sido elaborados por municipios y estados entre 2017 y 2023, lo que

3 <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/cnods/composicao-cnods>





evidencia una apropiación creciente de los ODS desde lo local, a pesar de limitaciones técnicas, presupuestarias y de participación social. En el plano internacional, Brasil ha reactivado su liderazgo estratégico en gobernanza climática y sostenibilidad, evidenciado en su papel como presidente en el G20 y próximo anfitrión de la COP30. También ha logrado posicionar iniciativas como el Fondo de Financiamiento para Bosques Tropicales, la organización de la Quinta Conferencia Global sobre Sinergias entre el Acuerdo de París y la Agenda 2030, lo que evidencia su apuesta por una articulación sistémica entre la acción climática, la equidad y el desarrollo sostenible. Este enfoque integrador también se refleja en la reactivación de instancias nacionales como la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) y el Comité Interministerial sobre Cambio Climático, que fortalecen la convergencia entre la agenda climática con el Marco Mundial de Biodiversidad.

En un esfuerzo pionero por integrar la igualdad étnico-racial en la sostenibilidad, Brasil ha impulsado la propuesta del ODS 18 “igualdad étnico-racial”, coordinada por los ministerios de Igualdad Racial y de los Pueblos Indígenas, junto a organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta evidencia una visión de desarrollo que no solo es ambientalmente responsable, sino también históricamente consciente y socialmente justa.

El país ha sentado las bases para un modelo de gobernanza más inclusivo, multiescalar y corresponsable. No obstante, persisten desafíos relacionados con la articulación entre niveles de gobierno, la vinculación efectiva del poder legislativo y la traducción de la Agenda 2030 en políticas con impacto directo en la vida cotidiana. Aun así, el proceso de reinstauración institucional, la vocación multilateral y la apuesta por integrar justicia climática y equidad racial en el centro de la planificación convierten a Brasil en un referente regional en gobernanza para el desarrollo sostenible.





## 1.2 DEL COMPROMISO A LA CORRESPONSABILIDAD: ACTORES NO ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

La participación de los sectores no estatales en la implementación de los ODS en Brasil ha sido sostenida y estratégica, incluso durante los periodos de debilitamiento institucional. Esta trayectoria demuestra que la Agenda 2030 trasciende lo gubernamental, consolidándose como una plataforma compartida de acción y vigilancia desde la sociedad.

Brasil evidencia un ecosistema diverso de actores no estatales que participan activamente en la implementación, el monitoreo y la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial, especialmente durante el periodo de debilitamiento institucional, consolidándose como garante de continuidad y legitimidad de la Agenda 2030. Desde 2017, el Grupo de Trabajo Agenda 2030 elabora el Informe Luz, una evaluación crítica e independiente sobre el avance del país, reconocida como referente nacional e internacional.

Organizaciones como Geledés - Instituto de la Mujer Negra y la Fundación Fiocruz destacan por su capacidad de incidencia, mientras que plataformas como la Red ODS Brasil y la Plataforma ODS Brasil han articulado esfuerzos entre actores diversos. Estas redes han contribuido al seguimiento colaborativo y a la territorialización de los ODS.

En el ámbito empresarial, entidades como el Instituto Ethos, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y el Pacto Global Brasil han promovido la adopción de prácticas sostenibles, aunque el compromiso del sector privado permanece limitado a la responsabilidad social corporativa, sin una integración estructural en la gobernanza nacional.

La academia también ha ganado protagonismo. Universidades como la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), la Universidad de Brasilia (UnB) o la Facultad Zumbi dos Palmares han incorporado los ODS en la formación, la investigación y el diseño de modelos de gobernanza. Redes como el Observatorio del Conocimiento y el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) aportan evidencia para el diseño de políticas basadas en datos.

Las juventudes participan desde espacios como Engajamundo y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), promoviendo agendas transformadoras, aunque con baja representación en instancias de decisión. Lo mismo ocurre con sindicatos, pueblos indígenas y afrodescendientes que, si bien inciden desde sus plataformas, enfrentan barreras para una participación efectiva y sostenida.

A pesar de la amplitud de iniciativas, persisten retos para consolidar la corresponsabilidad. La subrepresentación de ciertos sectores y la fragmentación de esfuerzos limitan una participación estructural e integrada. Avanzar hacia una arquitectura participativa robusta requerirá fortalecer capacidades, institucionalizar mecanismos de diálogo e incluir de forma efectiva a los actores no estatales en la toma de decisiones vinculantes.





### 1.3 TENDENCIAS, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

Brasil se encuentra en un punto de inflexión en su camino hacia el desarrollo sostenible, con un renovado compromiso institucional y una proyección internacional que refuerzan su liderazgo en la implementación de la Agenda 2030. El alineamiento del Plan Plurianual 2024–2027 con las metas globales y la propuesta del OSD 18 evidencian una voluntad política para traducir los principios de sostenibilidad en políticas públicas concretas. Sin embargo, este avance normativo y programático enfrenta desafíos estructurales que comprometen su continuidad, efectividad e impacto territorial.

El mecanismo oficial de gobernanza para los ODS — la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CNODS)— opera bajo un decreto presidencial y con composición paritaria, lo cual permite recuperar legitimidad y articulación intersectorial, pero su continuidad sigue siendo vulnerable frente a los ciclos políticos, al no contar aún con un marco legal que la institucionalice como órgano de Estado. Reforzar su permanencia jurídica es clave para consolidar su papel coordinador y garantizar una articulación sostenida entre niveles de gobierno y sectores sociales.

Simultáneamente, se observa un crecimiento de iniciativas impulsadas por juventudes, pueblos indígenas, movimientos sindicales y colectivos afrodescendientes, así como un involucramiento progresivo del sector privado. No obstante, la participación de estos actores sigue siendo desigual, episódica y limitada en los espacios formales de decisión. Traducir el compromiso social en corresponsabilidad efectiva requiere mecanismos permanentes de representación y diálogo vinculante que reconozcan a estos sectores como aliados estratégicos, más allá de la lógica consultiva.





La capacidad técnica y operativa también enfrenta tensiones. Si bien instituciones como el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) han avanzado en la generación de datos y en la adaptación de indicadores, la cobertura territorial sigue siendo insuficiente y las capacidades locales para integrar los ODS en la planificación continúan siendo débiles. Esta asimetría limita la trazabilidad de las políticas y la posibilidad de planificar con base en evidencia. Ampliar los recursos del sistema estadístico, acompañar técnicamente a los gobiernos subnacionales y democratizar el acceso a datos desagregados son condiciones básicas para cerrar esta brecha.

Aunque Brasil ha movilizado importantes recursos en áreas clave como la transición energética, la reducción de desigualdades y la lucha contra el hambre, no cuenta aún con un marco integrado que articule presupuesto público, cooperación internacional y capital privado en función de los objetivos globales.

El impulso de instrumentos como el Fondo de Financiamiento para Bosques Tropicales en el G20 muestra un potencial relevante, pero aislado. Es necesario construir un sistema de financiamiento coherente, con reglas claras, mecanismos innovadores y objetivos alineados con la sostenibilidad, que permita escalar y sostener los avances.

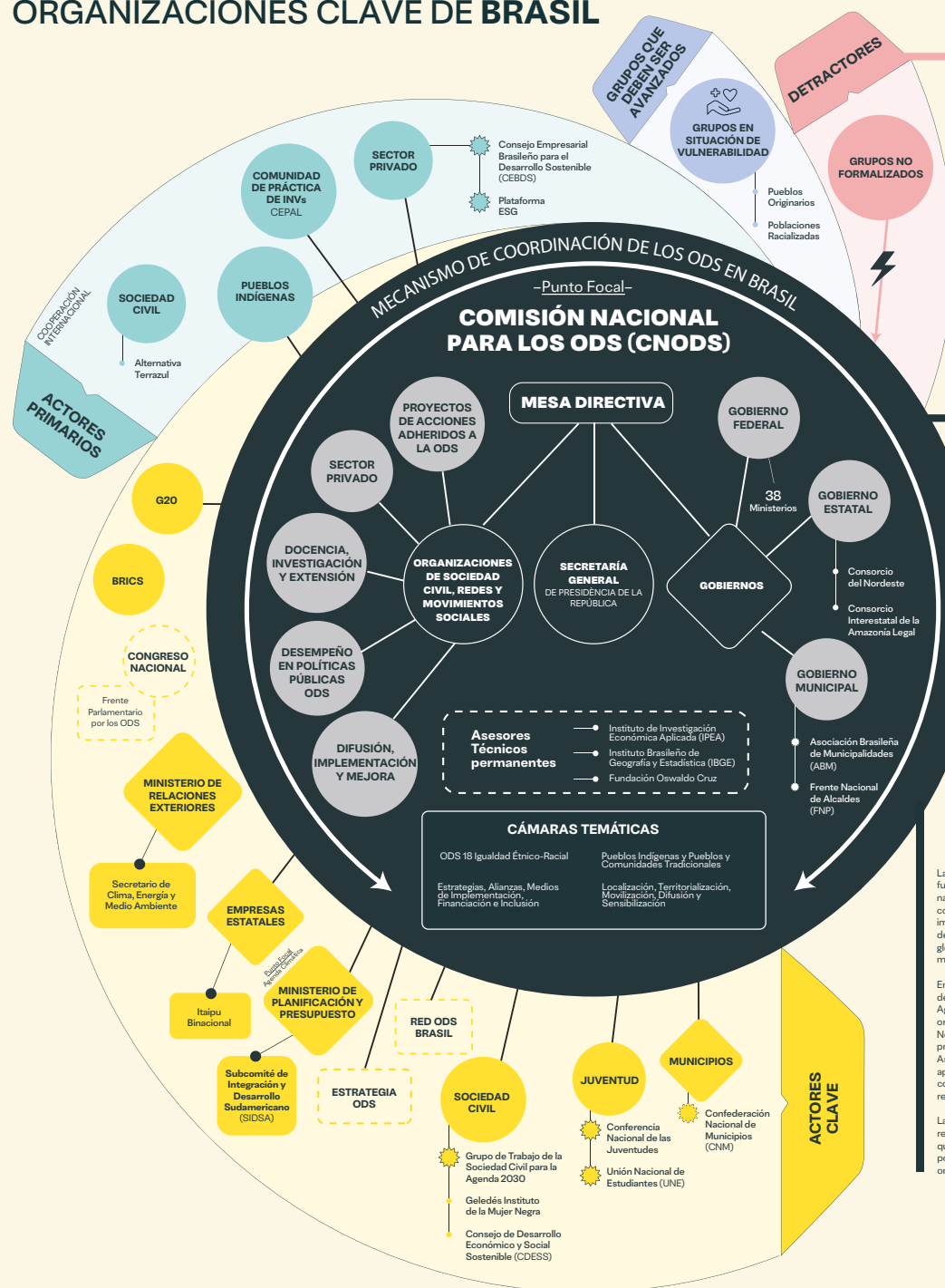
Adicionalmente, el impulso a nuevas agendas, como la justicia climática con enfoque étnico-racial, revela una voluntad de transformación institucional. Este potencial debe ser acompañado por políticas que integren ciencia, tecnología y saberes locales, y que permitan generar soluciones pertinentes, inclusivas y sostenibles desde los territorios.

Brasil ha recuperado protagonismo. El desafío ahora es consolidarlo mediante instituciones estables, capacidades fortalecidas, participación estructural y alianzas sostenidas que conviertan los compromisos en resultados tangibles para las poblaciones más excluidas y para el planeta.





## 1.4 MAPA DE PLATAFORMAS Y ORGANIZACIONES CLAVE DE BRASIL



En Brasil la Agenda 2030 enfrenta una creciente ola de campañas de desinformación para desvirtuar el propósito de la Agenda 2030 que, de acuerdo a algunos actores entrevistados, son promovidas por grupos no formalizados de diversos sectores.

La CNODS es el mecanismo institucional de coordinación y articulación de la Agenda 2030 y sus objetivos en Brasil, reinstalada en el 2023, en la Secretaría General de la Presidencia de la República, a través del Decreto N.º 11.704/2023.

La CNODS es un órgano consultivo y paritario que promueve la colaboración entre gobiernos y sectores diversos. Reúne ministerios, gobiernos subnacionales y actores sociales, y cuenta con 84 miembros que facilitan el diálogo entre los niveles federal, estatal y municipal, garantizando además la participación de la sociedad civil en la implementación de los ODS.

La sociedad civil brasileña ha desempeñado un papel fundamental en la sostenibilidad de los avances nacionales en torno a la agenda de sostenibilidad en contexto de bajo compromiso político, así mismo, ha impulsado la construcción participativa de iniciativas de sostenibilidad local, la adaptación de las metas globales y nacionales a las realidades territoriales, y el monitoreo de los avances en su cumplimiento.

Entre sus contribuciones destaca la elaboración anual del Informe Luz producido desde 2017 por el GT Agenda 2030, así como el liderazgo de organizaciones como Geledés - Instituto de la Mujer Negra, clave en la defensa de la equidad racial y en la propuesta del ODS 18 sobre Igualdad Étnico-Racial. Asimismo, entidades como la Fundación Fiocruz aportan asesoramiento técnico esencial para la consolidación de acciones y el seguimiento de sus resultados desde un enfoque multiactor.

La sociedad civil también cuenta con una sólida representación en la CNODS, con 42 representantes que participan activamente en la formulación de políticas públicas, estrategias e instrumentos orientados a la implementación de los ODS.

### LEYENDA



### MECANISMO COORDINADOR

Mandato para coordinar, articular y dar seguimiento a la implementación nacional de la Agenda 2030 | Mecanismo permanente.

### ACTORES CLAVE

Participación es indispensable para impulsar acciones | Influencia alta (recursos, alcance territorial, capacidad operativa y de movilización) | Interés en la temática | Interacciones y reconocimiento por otros actores | Miembro, colaborador o participante en espacios del mecanismo oficial de coordinación.

### ACTORES PRIMARIOS

Participación puede ser temporal/adhoc | Influencia media (toma de decisión limitada) | Interés en la temática | Reconocidos por su sector y/o por actores clave del ecosistema como un aliado estratégico.

### ACTORES SECUNDARIOS

Participación puede ser temporal/adhoc | Interés en la temática | Puede tener baja influencia a nivel nacional.

### GRUPOS QUE REQUIEREN SER AVANZADOS

Participación limitada o nula | Sin atribuciones o funciones específicas en la temática | Grupos en situación de vulnerabilidad | Puede (o no) tener interés en la temática | Requieren fortalecimiento de capacidades, información o acompañamiento.

### DETRACTORES

Se oponen o generan obstáculos a la implementación de la Agenda 2030.



# Colombia

Colombia se distingue por su rol protagónico en la gestación de la Agenda 2030<sup>4</sup> y su compromiso sostenido con el multilateralismo y la sostenibilidad. Fue pionera en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde Río+20, en la creación de un mecanismo oficial de coordinación para la gobernanza de la Agenda 2030 y en la alineación temprana de estos objetivos con su Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018<sup>5</sup>. Sus esfuerzos han sido reconocidos internacionalmente, prueba de ello es su rol como país anfitrión de la COP16 sobre biodiversidad (Cali, 2024). La diplomacia ambiental y la convergencia de agendas refuerzan su posición como referente regional.

<sup>4</sup> Siete meses antes de la aprobación oficial de la Agenda 2030.

<sup>5</sup> Alineación ex post de las metas ODS al PND 2014–2018





## 2.1 GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN UN ENTORNO DE PAZ

La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la implementación efectiva de la Agenda de Desarrollo post-2015 y sus ODS<sup>6</sup> constituye el mecanismo oficial de gobernanza de los ODS en Colombia. Esta instancia, presidida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que también ejerce su secretaría técnica, garantiza la articulación entre compromisos internacionales y políticas nacionales. Integra a siete entidades del Ejecutivo<sup>7</sup> y se articula con sectores no estatales a través de una Plataforma Multiactor que opera como espacio permanente de diálogo oficial<sup>8</sup>. Los avances, desafíos y logros del país se han plasmado en los cuatro Informes Nacionales Voluntarios (2016, 2018, 2021 y 2024) presentados ante el Foro Político de Alto Nivel.

A nivel subnacional, Colombia ha promovido activamente la localización de los ODS mediante el desarrollo de guías metodológicas para la elaboración de Informes Locales Voluntarios<sup>9</sup>, cartillas de indicadores para el seguimiento local y estrategias de acompañamiento técnico a los gobiernos subnacionales, en colaboración con el sector privado, la sociedad civil organizada y la cooperación internacional.

El compromiso político del país con las agendas multilaterales se refleja en una articulación estratégica entre la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Marco Mundial de Biodiversidad y, de forma singular, el Acuerdo de Paz. En este contexto, sostenibilidad y paz se entienden como dimensiones interdependientes. Ejemplo de ello es el eje prioritario del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: la “paz total e integral”, que reconoce que no hay desarrollo sostenible sin justicia social, ni reconciliación duradera sin inclusión territorial. Esta visión se traduce en políticas que integran restauración ecológica, justicia ambiental y garantías de derechos para víctimas del conflicto armado, pueblos étnicos y comunidades rurales históricamente excluidas.

Colombia ha convertido la acción climática en un instrumento de cohesión social y ordenamiento territorial. La Ley de Acción Climática, la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050), el Plan de Biodiversidad 2024–2030 y la Política Nacional de Biodiversidad constituyen una hoja de ruta que alinea los compromisos globales con las prioridades nacionales, articulando mitigación, adaptación, conservación de ecosistemas y justicia socioambiental. Esta convergencia se refuerza en el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que incorpora la bioeconomía, la transición energética justa y la gestión del agua como pilares para un nuevo contrato social desde los territorios.

6 Creada mediante Decreto 2080 de 2015:

[www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66611](http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66611)

7 Integrantes de la Comisión: [La Comisión ODS—La Agenda 2030 en Colombia—Objetivos de Desarrollo Sostenible](#)

8 Establecida por mandato, mediante CONPES 3918 “[Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible \(ODS\) en Colombia](#)”

9 Hasta el 2024 Colombia había desarrollado tres ILV (Bogotá, Pereira y Valle del Cauca), actualmente Boyacá y Bogotá se encuentran elaborando su primer y segundo Informe.



## 2.2 DEL COMPROMISO A LA CORRESPONSABILIDAD: ACTORES NO ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

Los sectores no estatales de la sociedad colombiana desempeñan un papel cada vez más estratégico en la gobernanza para la sostenibilidad. Plataformas de la sociedad civil, el sector privado, la academia y la cooperación internacional evolucionan de actores complementarios a socios clave en la implementación de políticas públicas, la adaptación local de las agendas globales y la generación de mecanismos innovadores de colaboración y financiamiento.

La sociedad civil demuestra una capacidad singular para acompañar, monitorear y enriquecer la implementación de los ODS. Plataformas como la Confederación Colombiana de ONG, Movilizadorio, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras promueven la participación desde los territorios históricamente excluidos. Estas plataformas generan datos, propuestas y confianza en el ámbito local, aunque su integración en espacios estratégicos de decisión sigue siendo limitada y requiere mayor institucionalización.

En el sector privado, gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), redes como el Pacto Global y alianzas como ProPacífico impulsan agendas de economía circular, transición energética, bioeconomía y sostenibilidad urbana, con impactos concretos en regiones con ecosistemas empresariales consolidados. Sin embargo, se necesita ampliar estas experiencias hacia territorios con menor capacidad institucional y establecer incentivos que alineen la inversión privada con las prioridades locales.

La academia aporta conocimiento aplicado, herramientas de monitoreo y formación técnica para la localización de los ODS. Instituciones como el Centro ODS para América Latina y el Caribe y universidades regionales contribuyen a traducir marcos globales en instrumentos útiles para los gobiernos locales. No obstante, persisten brechas entre la producción académica y la toma de decisiones públicas, debido a la falta de estructuras estables de asesoría científica a nivel institucional.

La cooperación internacional actúa como aliada estratégica en la movilización de recursos, la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional. El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2024–2027 ofrece una hoja de ruta conjunta con el Estado colombiano, alineada con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo y centrada en la paz total, la sostenibilidad ambiental y la justicia social. A través de alianzas con agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea, se han impulsado procesos clave en gobernanza ambiental, ordenamiento territorial y monitoreo de los ODS. Sin embargo, se requiere una programación más sensible a las prioridades territoriales, que reconozca el liderazgo de los gobiernos locales y de las organizaciones comunitarias en la definición e implementación de proyectos.





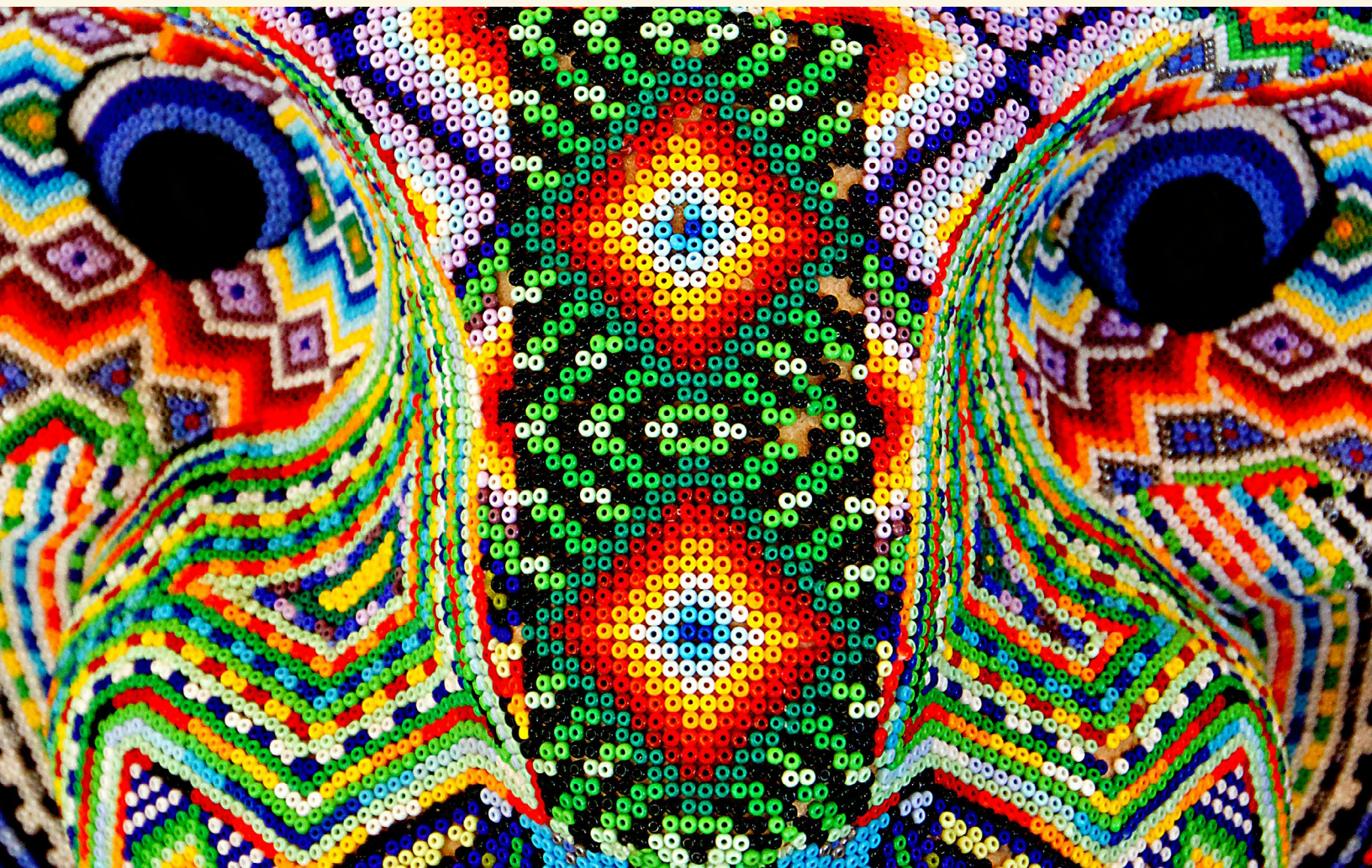
## 2.3 TENDENCIAS, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

Colombia avanza con decisión hacia la consolidación de una gobernanza para la sostenibilidad que articula marcos normativos, procesos participativos y una visión de desarrollo que reconoce la interdependencia entre la justicia social, ambiental y territorial.

Para fortalecer este mecanismo de gobernanza, es fundamental institucionalizar la corresponsabilidad multiactor en la implementación de los ODS. Esto requiere reformar y robustecer los mecanismos de coordinación existentes, de modo que la Plataforma Multiactor evolucione de un espacio consultivo de interlocución a una instancia de decisión compartida. Una acción concreta sería la creación de mesas temáticas autónomas, organizadas por objetivos prioritarios o por grupos poblacionales históricamente marginados. Asimismo, resulta esencial integrar formalmente al Congreso de la República en la

arquitectura de gobernanza de la Agenda 2030, mediante la conformación de una comisión legislativa o subcomités especializados en ODS. Esto promueve tanto el impulso de iniciativas legislativas alineadas como la continuidad de las estrategias más allá de los ciclos políticos.

De consolidarse como parte del mecanismo oficial, la Plataforma Multiactor podría potenciar la acción individual y colectiva. En la actualidad, los sectores no estatales formulan propuestas, intervienen en el monitoreo, impulsan soluciones y movilizan recursos. Sin embargo, esta energía social aún opera, con frecuencia, de manera paralela a la planificación pública, sin una articulación estructural que permita escalar su impacto. Existen experiencias destacadas que podrían marcar el camino, como la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 a partir







de más de 6.000 propuestas ciudadanas recolectadas en los Diálogos Regionales Vinculantes; la elaboración de informes nacionales y locales voluntarios con metodologías participativas; o las iniciativas empresariales para la restauración ecológica y la transición energética en el Valle del Cauca. El desafío consiste en institucionalizar estas dinámicas, generando plataformas que reconozcan a los actores no estatales como corresponsables en la definición de metas y estrategias.

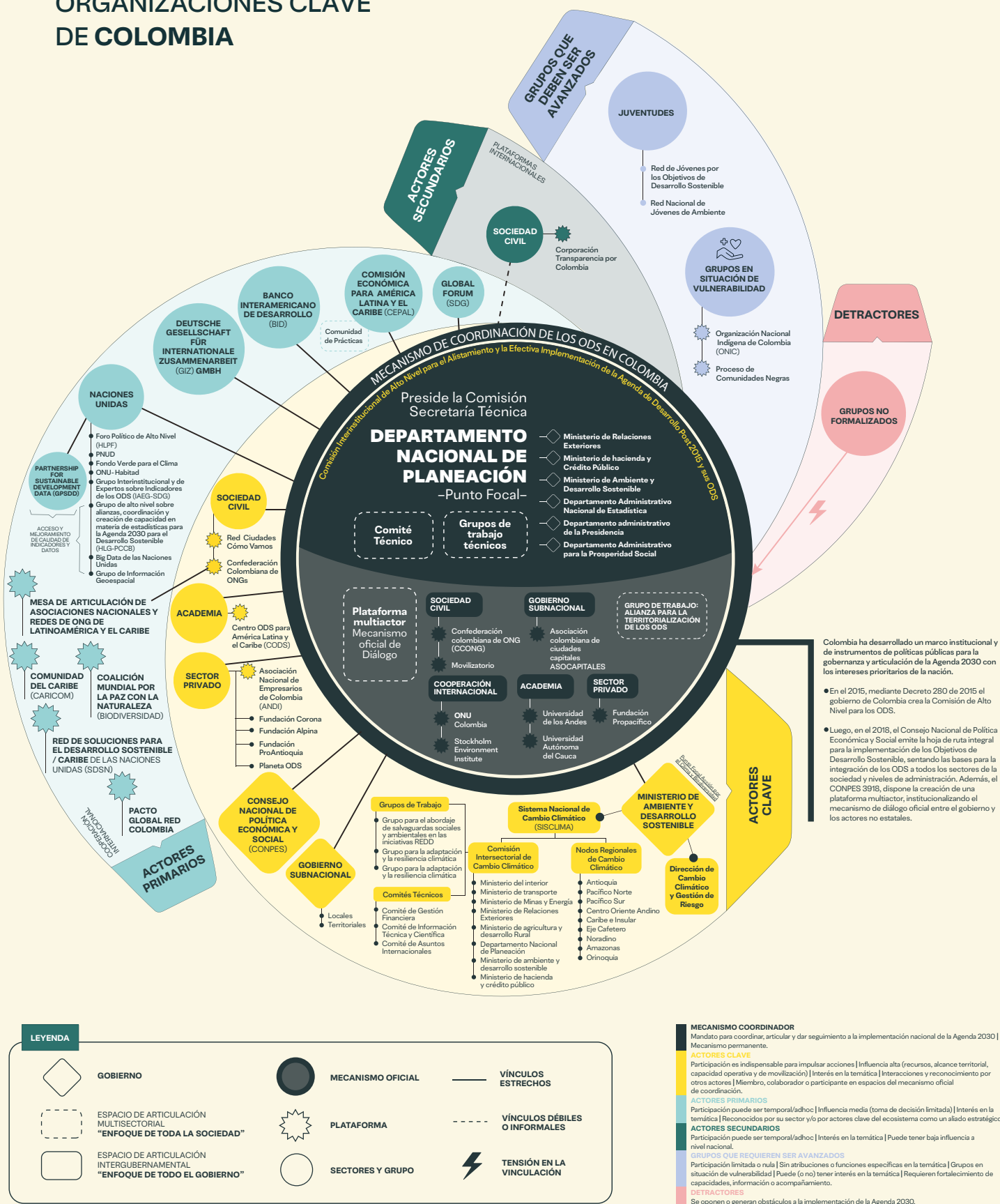
A nivel nacional, el país cuenta con capacidades significativas en términos de experiencia técnica, infraestructura estadística y producción académica. Sin embargo, los territorios enfrentan limitaciones en personal, financiamiento y generación de información específica, lo que compromete la implementación de políticas públicas diferenciadas, basadas en evidencia y adaptadas a las necesidades locales.

La ampliación de los indicadores ODS a más de 200, liderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), refleja una apuesta decidida por mejorar el seguimiento, pero debe ir acompañada de programas sistemáticos de formación y asistencia técnica. La articulación entre universidades regionales, centros de investigación y gobiernos locales representa una oportunidad para cerrar esta brecha, mediante convenios que faciliten la transferencia de conocimiento, el desarrollo de metodologías y la construcción de capacidades sostenibles en los territorios. De igual forma, la creación de fondos con impacto para la aceleración de los ODS, como plantea el Plan Nacional de Desarrollo<sup>10</sup>, podría canalizar recursos hacia el fortalecimiento institucional a nivel subnacional, especialmente en regiones estratégicas para la sostenibilidad y la paz.

<sup>10</sup> Por ejemplo: Fondo para la Sustentabilidad y Resiliencia Climática (FONSUREC); Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial; Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP); Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida; Fondo Regional para los Pactos Territoriales, entre otros.

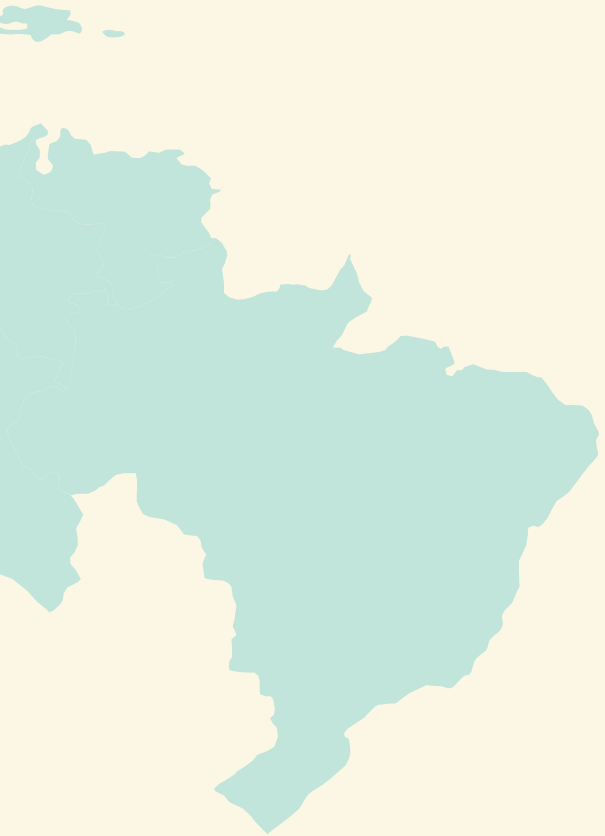


## 2.4 MAPA DE PLATAFORMAS Y ORGANIZACIONES CLAVE DE COLOMBIA





# Costa Rica



Costa Rica ha construido una arquitectura de gobernanza que articula compromiso político, visión de largo plazo y participación multisectorial en torno a la Agenda 2030. Desde 2016, el país se posicionó como referente regional al suscribir el Pacto Nacional por los ODS, un acuerdo sin precedentes que reunió a los tres poderes del Estado, gobiernos locales, universidades públicas, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales. Esta apuesta por una gobernanza compartida fue reafirmada en 2023 y se traduce en mecanismos institucionales que van más allá de la formalidad, configurando una estructura operativa para la implementación de los ODS.





### 3.1 GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA DESDE UN PACTO NACIONAL MULTISECTORIAL

El Consejo Nacional de los ODS, creado por decreto en 2017, constituye el mecanismo oficial de gobernanza. Está presidido por la Vicepresidencia de la República e integrado por los ministerios de Planificación, Relaciones Exteriores, Ambiente y Desarrollo Humano, lo que garantiza un enfoque intersectorial desde el más alto nivel político. Su órgano operativo, la Secretaría Técnica de los ODS (ST-ODS), adscrita al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), lidera la planificación, el seguimiento, la elaboración de informes y la articulación con el financiamiento público. A este andamiaje se suma un Comité Técnico —conformado por instituciones responsables de la planificación sectorial y territorial— y un Comité Consultivo Asesor, donde confluyen actores de todos los sectores sociales. Esta composición le otorga al mecanismo una densidad política y técnica que lo convierte en un espacio efectivo de coordinación y corresponsabilidad.

A nivel subnacional, la integración de los ODS ha adoptado un enfoque multinivel que busca fortalecer capacidades locales y territorializar la sostenibilidad. La Red de Cantones Promotores de los ODS, impulsada por la ST-ODS, el Sistema de Naciones Unidas y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, ha logrado la adhesión de más del 50% de los gobiernos locales. Esta red visibiliza el compromiso territorial y ha dado lugar a seis Informes Locales Voluntarios (ILV), apoyados por herramientas como el Sistema de Indicadores Cantonales. Sin embargo, persisten desafíos de equidad institucional: la heterogeneidad de capacidades técnicas y financieras entre municipalidades y las limitaciones en la disponibilidad de datos comprometen la posibilidad de evaluar impactos de manera sistemática.

El compromiso de Costa Rica con la sostenibilidad no se limita a la Agenda 2030. El país ha articulado sus marcos de planificación con otras agendas multilaterales como el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad, mediante una gobernanza climática sólida. El Ministerio de Ambiente y Energía lidera este esfuerzo a través de instituciones como la Dirección de Cambio Climático, responsable del seguimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), y la Comisión Nacional de Biodiversidad, que integra actores estatales y no estatales para garantizar la conservación y uso sostenible de los recursos. Estos instrumentos conviven con políticas de largo plazo, como el Plan Nacional de Descarbonización 2050, Plan Estratégico Nacional 2050, y Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, fortaleciendo la coherencia transversal entre sostenibilidad, acción climática y planificación pública.

En este contexto, la gobernanza costarricense combina visión política, participación social e instrumentos operativos que permiten una implementación articulada de las agendas globales. Sin embargo, decisiones recientes —como el Decreto Ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, que revoca la declaratoria de interés público para la Agenda 2030— introducen un cambio de orientación que podrían debilitar el modelo construido. Garantizar la continuidad del enfoque multisectorial e interinstitucional será clave para sostener la legitimidad y eficacia de la acción pública en el tramo final hacia el 2030.



### 3.2 DEL COMPROMISO A LA CORRESPONSABILIDAD: ACTORES NO ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

En Costa Rica, el impulso a la Agenda 2030 no es una tarea exclusiva del Estado. El proceso de implementación es sostenido por una amplia red de actores no estatales que han asumido responsabilidades concretas, generando capacidades, articulando agendas y demandando espacios de corresponsabilidad institucional. Esta participación no solo ha ampliado el alcance de las políticas públicas, sino que ha contribuido a construir legitimidad social en torno a los ODS.

La sociedad civil costarricense destaca por su heterogeneidad, territorialidad e involucramiento efectivo. La Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil para los ODS, integrada por más de 40 organizaciones, articula una agenda de trabajo centrada en derechos humanos, justicia social y desarrollo inclusivo. Su participación en el Pacto Nacional por los ODS, en el Comité Consultivo Asesor del Consejo Nacional de los ODS y en el Foro Nacional constituye una oportunidad para canalizar demandas desde territorios y poblaciones históricamente excluidas. Organizaciones integrantes de esta plataforma han elaborado informes alternativos sobre el avance en los ODS que ofrecen una lectura crítica y propositiva de los avances oficiales. Sin embargo, la sostenibilidad de su trabajo aún enfrenta limitaciones estructurales, como la generación de una agenda visible para otros sectores, la escasez de recursos, la dependencia de apoyos externos y la ausencia de mecanismos institucionales de financiamiento.

El sector privado también avanza como actor estratégico en la implementación de la Agenda 2030. Organizaciones como la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) promueve activamente modelos de negocio sostenibles, incidiendo en temas como la economía circular, la inclusión laboral y la igualdad



de oportunidades. A través de su iniciativa “Apuesta Mega 2025”, AED articula esfuerzos empresariales con impacto territorial, demostrando que la responsabilidad corporativa puede alinearse con los ODS. No obstante, aún persisten barreras para su participación plena en los espacios de toma de decisiones, así como una percepción de escaso reconocimiento institucional hacia sus contribuciones, lo que limita su potencial transformador.

Por su parte, la academia consolida su papel como generadora de conocimiento aplicado y como puente entre la evidencia técnica y la formulación de políticas públicas. Desde el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas se ha desarrollado el Sistema de Información Interuniversitario para la Gestión de los ODS, que permite sistematizar las acciones académicas en función de la Agenda 2030. La Universidad de Costa Rica, a través de su Centro ODS, emerge como un referente técnico en la evaluación del cumplimiento de los ODS. Además, se observan avances en la transversalización de los objetivos en los planes de estudio, fortaleciendo así una ciudadanía profesional orientada al desarrollo sostenible.

La cooperación internacional, especialmente el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, desempeña un rol catalizador. Su Marco de Cooperación 2023–2027 prioriza la gobernanza inclusiva, la equidad territorial y el fortalecimiento de capacidades, apoyando tanto al Estado como a actores no estatales. Esta articulación se traduce en acompañamiento técnico, financiamiento estratégico y apoyo a procesos clave como la Red de Cantones Promotores de los ODS.

Lo que distingue el caso costarricense es que la corresponsabilidad no se limita a la firma de pactos o a la participación simbólica. Se traduce en la búsqueda de diálogos permanentes, generación de evidencia desde múltiples sectores, y alianzas operativas que apuntan a una implementación más democrática y efectiva de los ODS. No obstante, para consolidar este modelo, es clave fortalecer los mecanismos de participación, asegurar sostenibilidad institucional y garantizar que las voces de todos los actores tengan un impacto real en las decisiones estratégicas del país.





### 3.3 TENDENCIAS, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

Costa Rica ha sido reconocida por una arquitectura de gobernanza multisectorial que permite integrar los ODS en la planificación nacional, el financiamiento público y la participación ciudadana. El Consejo Nacional de los ODS, respaldado por el Pacto Nacional y su Secretaría Técnica, ha consolidado una base institucional robusta. No obstante, el Decreto Ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, al revocar la declaratoria de interés público de la Agenda 2030, marca un cambio de orientación que podría debilitar ese consenso y plantea riesgos para la continuidad del proceso.

Frente a esta situación, el desafío central en materia de gobernanza es preservar la legitimidad del mecanismo oficial y garantizar su capacidad para coordinar, implementar y monitorear la Agenda más allá de los ciclos políticos. La redefinición de funciones y la eliminación de la declaratoria de interés público generan incertidumbre sobre el compromiso estatal sostenido. La recomendación clave es restituir —de manera técnica y participativa— las disposiciones que aseguren la prioridad política, el financiamiento y la estabilidad institucional del Consejo Nacional y su Secretaría Técnica. Asimismo, es necesario blindar estos mecanismos mediante normas o decretos que garanticen su continuidad y capacidad de incidencia, independientemente de los vaivenes administrativos.

El país desarrolla un ecosistema diverso y activo. La sociedad civil, el sector empresarial, la academia y la cooperación internacional consolidan plataformas que generan propuestas, monitorean avances y promueven soluciones innovadoras. Sin embargo, la inclusión efectiva de estos actores en los procesos de toma de decisiones estratégicas sigue siendo desigual. Persisten barreras estructurales para poblaciones indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades rurales, así como una débil articulación entre los aportes del sector privado y la planificación pública. Superar estas brechas requiere institucionalizar espacios de participación vinculantes, crear comités consultivos temáticos y

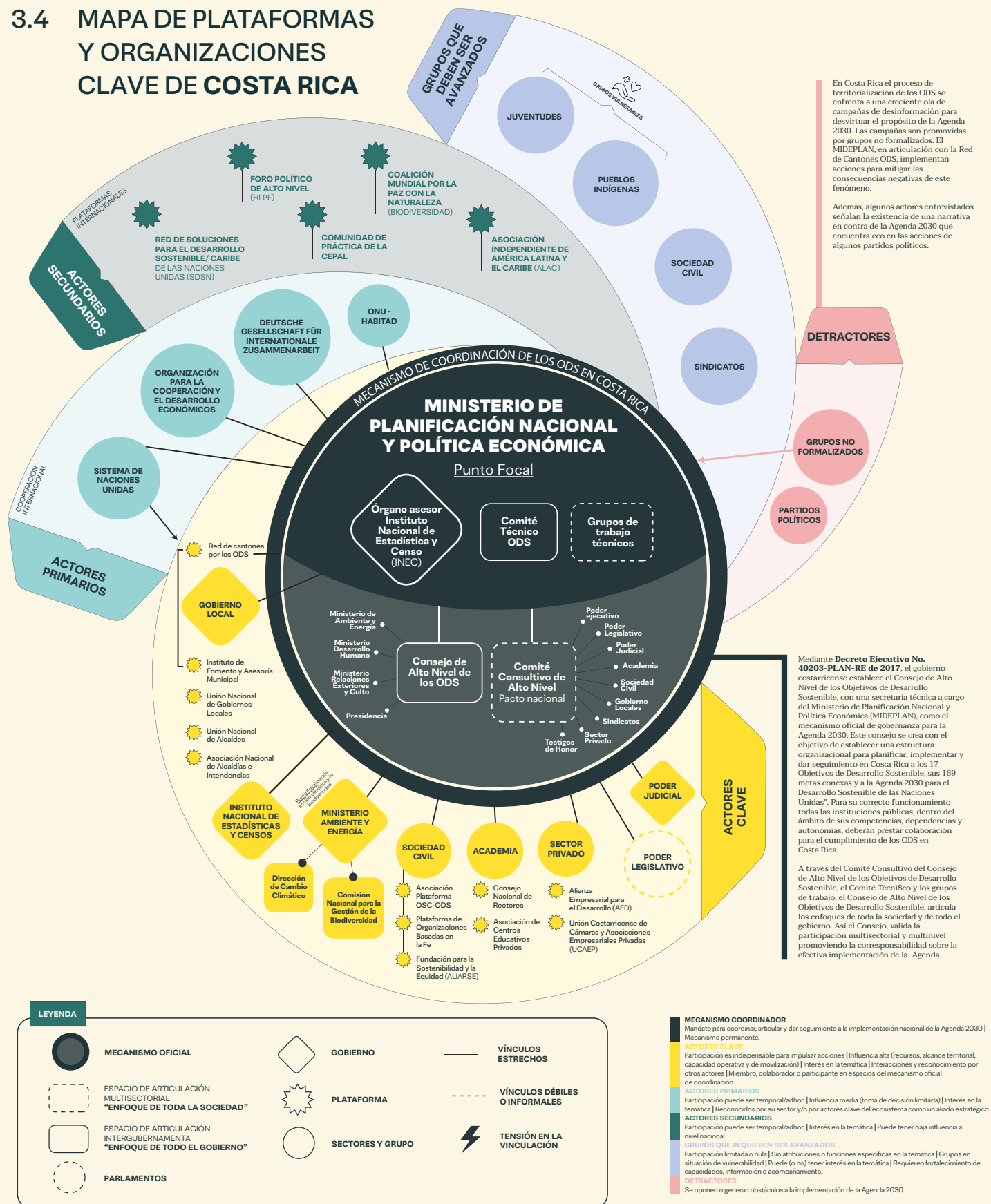
garantizar mecanismos que reflejen la diversidad del país. Iniciativas como la Red de Jóvenes de Ambiente o los proyectos de ecoturismo indígena deben ser reconocidas como prácticas transformadoras y articuladas con el Consejo Nacional y los gobiernos locales.

En el ámbito de las capacidades, Costa Rica es reconocida por su compromiso con la rendición de cuentas y el monitoreo participativo. La elaboración de tres Informes Nacionales Voluntarios y seis Informes Locales Voluntarios, junto con el desarrollo de sistemas de indicadores cantonales, da testimonio de un país con capacidades técnicas avanzadas en el seguimiento de la Agenda. No obstante, esta capacidad no se distribuye de manera homogénea. Las asimetrías entre gobiernos locales, la escasez de personal técnico especializado y las brechas en el acceso a datos desagregados comprometen la implementación territorial. Para enfrentar este desafío, se recomienda crear un programa nacional de fortalecimiento de capacidades subnacionales, apoyado en alianzas con universidades, cooperación internacional y redes de municipios. Esta estrategia debe incluir formación continua, acceso a herramientas digitales, financiamiento para asistencia técnica y metodologías de planificación orientadas a resultados.

En conjunto, el caso costarricense muestra que los avances logrados no son irreversibles. Sostenerlos requiere reforzar la institucionalidad que ha dado legitimidad a la Agenda 2030, ampliar la inclusión social como condición de corresponsabilidad y cerrar las brechas territoriales que aún impiden una implementación plenamente equitativa. Recuperar el sentido del pacto y traducirlo en decisiones institucionales sostenidas en el tiempo será clave para que el país no retroceda en su liderazgo regional en sostenibilidad.



### 3.4 MAPA DE PLATAFORMAS Y ORGANIZACIONES CLAVE DE COSTA RICA





# Jamaica

Jamaica se posiciona como referente regional en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la formulación de políticas y la planificación nacional a través de un sólido mecanismo de coordinación institucional.





## 4.1 GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN UN ENTORNO DE RESILIENCIA INSULAR

Desde la adopción de la Hoja de Ruta para la Implementación de los ODS en 2017, el país ha construido un marco institucional anclado en una estructura de múltiples niveles que promueve la coordinación intergubernamental y la participación inclusiva. Esta estructura se articula a través de un mecanismo de coordinación trilateral compuesto por el Grupo Central Nacional de los ODS, el Comité Nacional de Supervisión de la Agenda 2030 (NOC) y los Grupos de Trabajo Temáticos (TWG) de Visión 2030. La Secretaría de Visión 2030 Jamaica, junto con la Secretaría de los ODS, lidera esta configuración institucional y opera bajo el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ), este último designado oficialmente como el punto focal nacional para los ODS desde 2019.

El marco institucional de Jamaica para la implementación de los ODS se basa en una fuerte coordinación, participación inclusiva y gobernanza multinivel. En su núcleo se encuentra el Grupo Central Nacional de los ODS, que reúne a los puntos focales del Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior (MFAFT) y el Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN). Este grupo garantiza la coherencia entre la planificación, el seguimiento y la cooperación internacional. Como complemento está el Comité Nacional de Supervisión de la Agenda 2030 (NOC), un mecanismo clave que reúne a entidades gubernamentales, la sociedad civil, el mundo académico y otras partes interesadas para orientar la implementación de los ODS. El NOC supervisa la hoja de ruta de los ODS, alinea las prioridades nacionales con Visión 2030 Jamaica y los sucesivos Marcos de Política Socioeconómica a Medio Plazo (MTF), y opera a través de subcomités sobre datos, seguimiento y evaluación, y comunicación, todo lo cual ayuda a fortalecer la participación pública y la rendición de cuentas.

Los Grupos de Trabajo Temáticos (GTT) proporcionan un nivel adicional de participación y coordinación de las partes interesadas. Estas plataformas multisectoriales reúnen a representantes de las instituciones públicas, la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado y los socios internacionales para el desarrollo con el fin de elaborar políticas, supervisar los avances e identificar las prioridades del sector. Institucionalizados como elemento permanente del marco de desarrollo de Jamaica, los GTT garantizan que la planificación y la ejecución sean integradoras, transparentes y se basen en necesidades sectoriales reales. Juntos, el Grupo Central, el NOC y los GTT forman un sistema sólido que conecta la acción nacional con las voces de los ciudadanos y los compromisos globales de desarrollo, haciendo que el enfoque de Jamaica hacia los ODS sea tanto participativo como estratégico.

Este enfoque participativo ha sido clave para el desarrollo de dos Informes Nacionales Voluntarios (INV) en 2018 y 2022, desarrolladas a través de amplios procesos de consulta, encuestas, talleres y comités. Además, el país presentó un Informe de Progreso específico sobre los ODS 2019/2020 en 2022, lo que evidencia un compromiso sostenido con la rendición de cuentas para los ODS.

Los esfuerzos del Gobierno de Jamaica también se expresan a nivel subnacional. Para apoyar la territorialización de los ODS, Jamaica implementa Planes Locales de Desarrollo Sostenible (PLDS), coordinados por el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario. Estos planes tienen como objetivo alinear la visión de desarrollo nacional Visión 2030 Jamaica y los ODS con las prioridades y estrategias locales a nivel parroquial y comunitario. Iniciativas notables como “Parish Talk”, activa desde 2016, que fomenta la participación ciudadana en la planificación local, así como la colaboración en curso



con la Comisión Europea para fortalecer el papel de las autoridades locales. ut. Aunque Jamaica aún no ha presentado oficialmente Informes Locales Voluntarios (ILV) al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, ya se han desarrollado directrices metodológicas, creando un entorno propicio positivo para su futura preparación e implementación.

Simultáneamente, el país muestra su compromiso con las agendas multilaterales liderando iniciativas globales como la Asociación para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (*NDC Partnership*) y el Fondo Verde para el Clima. Jamaica fue el primer Estado caribeño en presentar su NDC actualizada (2020), y ha ratificado acuerdos clave como el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Pacto Climático de Glasgow. A nivel regional, destaca dentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC), promoviendo proyectos de adaptación y mitigación desde una perspectiva territorial e inclusiva.

En línea con su liderazgo climático, Jamaica aprobó en 2023 su Estrategia de Reducción de Emisiones a Largo Plazo y Resiliencia Climática 2050 (LTS). Desarrollada a través de un proceso de múltiples partes interesadas liderado por la División de Cambio Climático (CCD) y el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ), y con el

apoyo de socios internacionales, la LTS proporciona una hoja de ruta clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 73% por debajo de los niveles de 2020 para 2050 y para llegar a cero neto en 2060. Esboza vías sectoriales específicas para la energía, el transporte, los residuos, la agricultura y las infraestructuras costeras, integrando la resiliencia climática con el desarrollo sostenible. Esta estrategia complementa la Visión 2030 de Jamaica y la NDC actualizada (2020), al tiempo que envía una fuerte señal de alineación, ambición y preparación para la inversión.

La articulación entre la Agenda 2030 y otras agendas globales es un objetivo explícito de la planificación nacional. La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2021-2026 y el Plan Nacional de Adaptación están alineados con Visión 2030 y los ODS. La Red de Puntos Focales de Cambio Climático (CCFPN, por sus siglas en inglés) desempeña un papel esencial en esta integración al incluir puntos focales en ministerios, organismos, la sociedad civil y el mundo académico, y garantizar la coherencia entre las agendas a través de datos, sensibilización y planificación compartida. Esta estructura permite a Jamaica abordar los retos de la sostenibilidad desde una perspectiva interconectada y centrándose en la justicia climática, la resiliencia territorial y la inclusión de las partes interesadas tradicionalmente excluidas.





## 4.2 DEL COMPROMISO A LA CORRESPONSABILIDAD: ACTORES NO ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

Las principales partes interesadas en Jamaica se benefician de los espacios institucionales para la participación, incluidas las plataformas que representan a la sociedad civil, los jóvenes y el sector privado.

La implementación de la Agenda 2030 se caracteriza por la participación activa de actores no estatales, que buscan ir más allá de un papel consultivo para posicionarse como socios estratégicos en la planificación, implementación y monitoreo de los ODS. Esta corresponsabilidad se ha articulado a través de canales institucionales establecidos, así como de iniciativas independientes que enriquecen el proceso con diversos enfoques y capacidades especializadas.

En Jamaica, la sociedad civil desempeña un papel activo en la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030 a través de mecanismos de participación consolidados. Una plataforma clave es el Consejo de Servicios Sociales Voluntarios (CVSS), reconocida como una destacada organización sombrilla que promueve el desarrollo sostenible. La CVSS es miembro del NOC, lo que garantiza la representación de la sociedad civil en los espacios de coordinación de múltiples partes interesadas. También participa en plataformas nacionales más amplias, como el Comité Asesor Fiscal, la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y el Programa Nacional de Voluntariado para la Gestión del Riesgo de Desastres. Junto a la CVSS, organizaciones como *GROOTS Jamaica*, *SISTREN Theatre Collective*, *Woman Inc.* y *Jamaica Household Workers Union* contribuyen activamente a la planificación del desarrollo, haciendo especial hincapié en la igualdad de género y la inclusión de voces marginadas. Sin embargo, a pesar de estar formalmente incluidas en las estructuras de toma de decisiones, las organizaciones de la sociedad civil siguen teniendo dificultades para influir en los resultados de las políticas. La capacidad institucional limitada, el acceso restringido a la financiación sostenible y la necesidad de una inclusión más amplia

de las comunidades de base y subrepresentadas siguen siendo obstáculos clave para una participación más eficaz y equitativa.

Por otro lado, el sector privado ha intensificado su participación en los ODS, con un énfasis en la sostenibilidad corporativa, el empleo juvenil, la economía digital y la reducción de las desigualdades. El marco Visión 2030 Jamaica reconoce al sector privado como un motor clave del crecimiento económico y la creación de riqueza, subrayando su papel esencial en la consecución del desarrollo sostenible. Dentro de esta estructura institucional, la Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ) es reconocida como la principal entidad paraguas responsable de representar y coordinar la participación del sector privado en la Agenda 2030. La colaboración entre la PIOJ y la Cámara de Comercio de Jamaica (JCC) ha dado lugar a talleres, programas de responsabilidad social corporativa y campañas de sensibilización. Aunque el compromiso sigue siendo desigual entre las grandes empresas y las pymes, la inclusión del sector privado en los mecanismos de coordinación permite un diálogo más sistemático sobre su papel en la transformación sostenible de Jamaica.

En el ámbito académico, universidades como la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) y la Universidad Tecnológica (UTech) han sido fundamentales para la producción de conocimientos, el diseño de indicadores y la formación de personal técnico en la planificación y el seguimiento de los ODS. Si bien no existe una plataforma centralizada que coordine formalmente la participación académica en el marco de los ODS, estas instituciones colaboran activamente con el PIOJ y el Instituto de Estadística (STATIN) en la elaboración de informes y el fortalecimiento de la capacidad estadística. Participan activamente como miembros del Comité de Supervisión y de los subcomités, así como de los

grupos ad hoc que orientan proyectos clave como el INV. Las contribuciones de la UWI incluyen la coautoría del Informe Global de Desarrollo Sostenible (GSDR 2019-2023) y el desempeño de la Presidencia de Acción Climática designada por las Naciones Unidas, lo que destaca su liderazgo en soluciones climáticas basadas en evidencia.

En Jamaica, la participación de los jóvenes en la planificación del desarrollo se reconoce cada vez más como esencial, y se han realizado esfuerzos significativos para apoyar el empoderamiento y la inclusión de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones. Los jóvenes están representados en los Grupos de Trabajo Temáticos (GTT), lo que les permite participar en los diálogos sobre políticas públicas y desarrollo. A nivel nacional, plataformas como el Consejo Asesor de la Juventud de Jamaica (YACJ) y la Red de Defensa de la Juventud de Jamaica (JYAN) promueven el liderazgo juvenil, la unidad y el desarrollo sostenible, trabajando para influir en las políticas a favor de los jóvenes. A escala regional, el Consejo Regional de la Juventud del Caribe (CRYC) desempeña un papel clave en la defensa de la participación de los jóvenes en las esferas social, económica y política en todo el Caribe. Estas iniciativas contribuyen a reforzar la voz de los jóvenes en los procesos de planificación y a garantizar que sus perspectivas se reflejen en las estrategias nacionales de desarrollo.

En general, los actores no estatales en Jamaica han demostrado un compromiso sostenido con la Agenda 2030, asumiendo un papel cada vez más proactivo y estructural. Reforzar esta corresponsabilidad requiere ampliar los mecanismos de financiación para hacerlos accesibles a los sectores no estatales, consolidar su participación en la toma de decisiones estratégicas y asegurar que sus contribuciones se traducen en políticas públicas eficaces y adaptadas a los contextos territoriales.

### 4.3 TENDENCIAS, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES



Jamaica se ha posicionado como líder regional en la integración de la Agenda 2030 en la planificación nacional del desarrollo, con una arquitectura institucional robusta que incluye el Grupo Central Nacional de ODS, el Comité Nacional de Supervisión (NOC) y los Grupos de Trabajo Temáticos (TWG). Este ecosistema —anclado en el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ)— combina la coordinación interinstitucional, la participación de múltiples partes interesadas y el rigor técnico. El desarrollo de dos revisiones nacionales voluntarias (2018 y 2022), una hoja de ruta dedicada a los ODS y un informe de progreso de los ODS (2019/2020) demuestran un compromiso político sostenido y una sólida cultura





de planificación. Sin embargo, el pleno potencial transformador de estos mecanismos se ve restringido por una integración vertical limitada, que debilita la capacidad de los gobiernos locales para adaptar, aplicar y supervisar los ODS en sus territorios. Sin una mayor articulación subnacional, la coherencia y el alcance territorial de las políticas públicas siguen siendo desiguales.

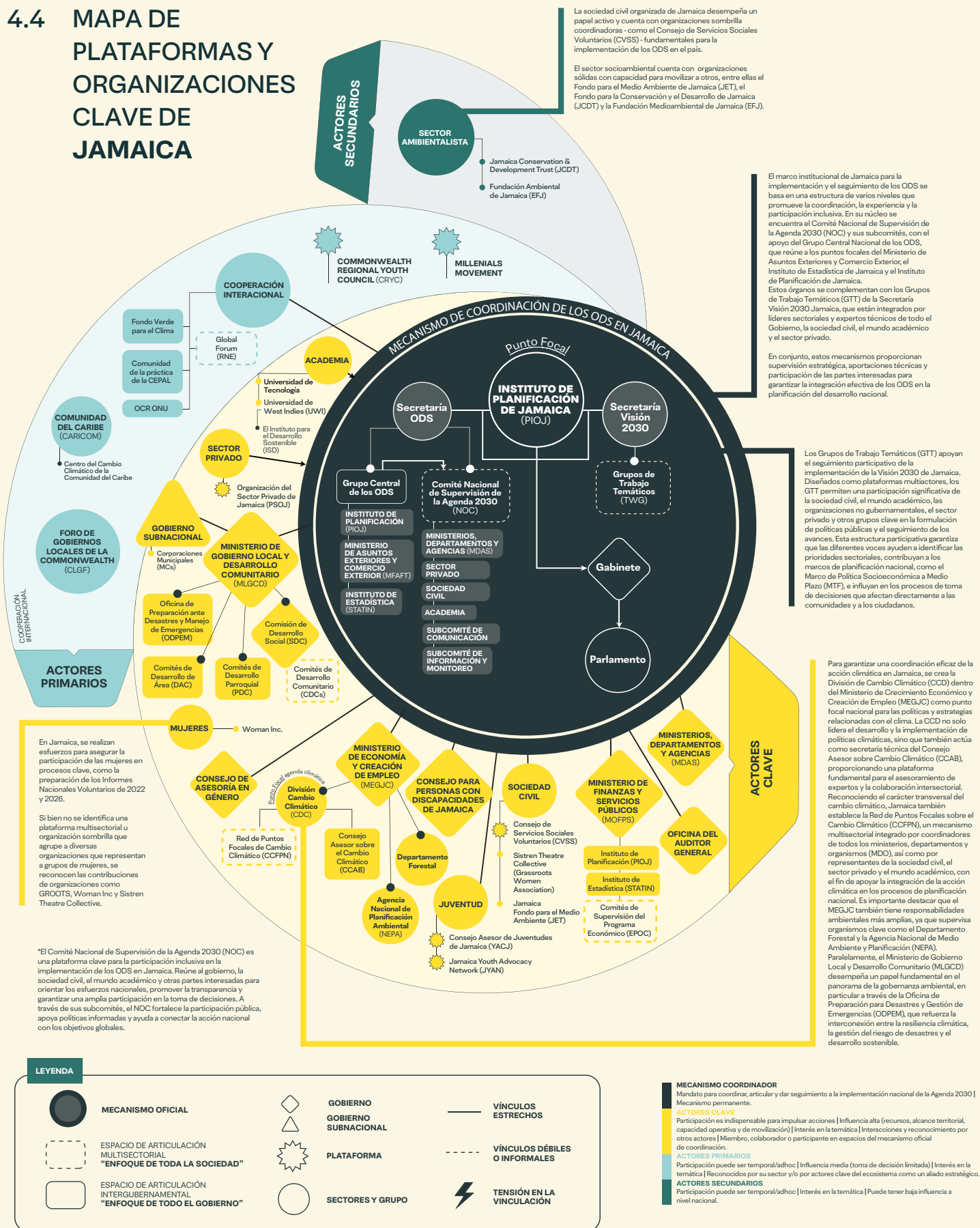
La sociedad civil, los jóvenes, el mundo académico y el sector privado se han ido incorporando progresivamente a la estructura de coordinación nacional, a través de mecanismos como el CON y los GTT. El Consejo de Servicios Sociales Voluntarios (CVSS), *GROOTS Jamaica*, *Woman Inc.*, la UWI y el PSOJ, entre otros, han contribuido a la planificación, el seguimiento y la defensa pública. Sin embargo, a pesar de estos avances, la participación sigue siendo en gran medida consultiva. No existen marcos permanentes de cogestión y el acceso limitado a una financiación sostenible sigue obstaculizando la capacidad de los agentes no estatales —especialmente las organizaciones comunitarias y de base— para participar de forma eficaz y coherente. En consecuencia, el valioso capital social sigue estando infrautilizado y funciona en paralelo a los mecanismos institucionales, en lugar de ser un componente plenamente integrado de la aplicación nacional.

La movilización de recursos sigue siendo un reto estructural. Aunque Jamaica ha hecho esfuerzos para alinear el presupuesto nacional con los ODS, el espacio fiscal es limitado, y los instrumentos para atraer la inversión privada alineada con los objetivos de sostenibilidad son todavía incipientes. El potencial de los mecanismos de financiación innovadores —como los fondos temáticos, los bonos verdes o la financiación mixta— aún no se ha aprovechado plenamente. Esta fragilidad financiera afecta tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil, limitando la continuidad y escalabilidad de las iniciativas de desarrollo.

Las capacidades técnicas y científicas, concentradas en instituciones como el PIOJ, STATIN y la UWI, han permitido generar indicadores, sistemas de seguimiento y herramientas basadas en pruebas. Sin embargo, estas capacidades no se transfieren sistemáticamente al nivel local, donde tiene lugar la implementación. Esta brecha en la descentralización técnica refuerza las asimetrías en el conocimiento, la planificación y la ejecución. Además, aunque Jamaica está avanzando en la planificación basada en la ciencia —incluida su Estrategia de Reducción de Emisiones a Largo Plazo y Resiliencia Climática (LTS, por sus siglas en inglés)—, los beneficios de la innovación científica aún no se han traducido en soluciones prácticas de propiedad comunitaria que mejoren la resiliencia y el desarrollo inclusivo a escala.

Para aprovechar plenamente sus activos institucionales, sociales y técnicos, Jamaica debe profundizar la integración entre los sistemas nacionales y locales, institucionalizar la gobernanza participativa a través de mecanismos estables de cogestión, ampliar la financiación para todos los actores, descentralizar las capacidades y democratizar el acceso a la tecnología. Estos cambios permitirían a Jamaica activar las palancas identificadas en el Marco Transformacional del Informe Global de Desarrollo Sostenible 2023 y lograr un desarrollo inclusivo y sostenible en todos los territorios. Dada la sólida cultura de planificación del país, su comprometida sociedad civil y su reconocido liderazgo en la región, Jamaica está bien posicionada para convertir estos retos de en oportunidades y convertirse en un modelo de aceleración de los ODS basado en la equidad, la resiliencia y la apropiación colectiva.

## 4.4 MAPA DE PLATAFORMAS Y ORGANIZACIONES CLAVE DE JAMAICA





# Perú



Perú avanza con determinación en la implementación de la Agenda 2030, impulsado por el compromiso, la resiliencia, la coordinación intersectorial y la alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con instrumentos de política pública a largo plazo.





## 5.1 GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN UN ENTORNO POLÍTICO CAMBIANTE

El caso peruano refleja una adhesión estratégica —no exenta de tensiones— a la arquitectura global de sostenibilidad. En lugar de adoptar un modelo institucional cerrado, el país cuenta con un entramado de planificación que articula la Agenda 2030 con visiones nacionales de largo plazo y compromisos multilaterales. En ausencia de un órgano específico de gobernanza con mandato legal sobre los ODS, el liderazgo técnico recae en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que en la práctica actúa como punto focal nacional, articulando con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la producción de datos oficiales y, con diversos

sectores, la planificación integrada. Este ejercicio funcional se ve complementado por espacios como el Acuerdo Nacional, foro de concertación entre el Estado y la sociedad, que ha respaldado los ODS como política de Estado. Sin embargo, la ausencia de un marco institucional con autoridad política y capacidad de coordinación intersectorial sigue generando vacíos que debilitan la gobernanza integral de la Agenda.

La Visión del Perú al 2050 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional reflejan una voluntad de trascender el cortoplacismo, y su formulación participativa ha implicado a los tres poderes del Estado y a diversos actores sociales. No obstante, esta apertura no se ha traducido aún en una gobernanza estable o estructurada. Más aún, la ausencia de un espacio deliberativo con poder de coordinación y seguimiento de los ODS diluye responsabilidades y desdibuja liderazgos en el entramado institucional.







En paralelo, la territorialización de los ODS avanza con señales mixtas. Aunque varias regiones han alineado sus planes de desarrollo a la Agenda 2030, el esfuerzo sigue siendo voluntarista, dependiente del compromiso político local y de apoyos puntuales de la cooperación internacional. Esta desigualdad territorial revela las limitaciones estructurales de la centralización de funciones y la necesidad de fortalecer capacidades para garantizar coherencia y continuidad en los niveles subnacionales.

Donde sí se percibe una apuesta política clara es en la articulación con las agendas climática y de biodiversidad. Perú ha asumido un rol activo en el marco del Acuerdo de París y del Convenio sobre Diversidad Biológica, institucionalizando su acción ambiental mediante normativas robustas, estrategias nacionales y espacios de gobernanza multiactor como la Comisión de Alto nivel de Cambio Climático (CANCC), la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC) y la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB). El involucramiento de pueblos indígenas y gobiernos subnacionales en estas plataformas introduce elementos de democratización en la toma de decisiones ambientales, aunque su alcance sigue condicionado por la fragmentación institucional y la fragilidad de los mecanismos de articulación intergubernamental.

En suma, el compromiso político de Perú con la sostenibilidad se manifiesta más como una convergencia de agendas que como un pacto institucional consolidado. Existe una visión a largo plazo, hay normativas, espacios multiactor e iniciativas subnacionales relevantes, pero falta un anclaje político e institucional que unifique estos esfuerzos y los proyecte más allá de la lógica sectorial o del calendario electoral.



## 5.2 DEL COMPROMISO A LA CORRESPONSABILIDAD: ACTORES NO ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

La experiencia peruana revela que, en ausencia de una gobernanza estatal plenamente articulada para la Agenda 2030, han sido los actores no estatales quienes han sostenido y dinamizado parte del proceso. Lejos de ocupar un rol meramente consultivo, estos sectores han construido sus propias agendas, generado marcos de monitoreo autónomos, movilizad recursos y presionado por espacios de deliberación efectiva. La corresponsabilidad no ha sido conferida desde el Estado: se ha conquistado.

En el caso de la sociedad civil, su participación ha trascendido la dimensión testimonial. Plataformas como el Grupo Agenda 2030, el Observatorio de la Sociedad Civil y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) se han consolidado como espacios permanentes de producción de conocimiento, evaluación crítica y propuesta política. La elaboración de “informes paralelos” en 2022 y 2024 —como ejercicios paralelos a los Informes Nacionales Voluntarios— evidencia una vocación de vigilancia democrática que busca equilibrar la narrativa oficial con diagnósticos alternativos, basados en datos y voces desde el territorio. Estos informes no solo cuestionan: también proponen y exigen articulación efectiva con el aparato estatal.

El sector privado, por su parte, ha transitado de la adhesión simbólica a una creciente implicación estratégica. Iniciativas como Perú Sostenible (antes Perú 2021) y el SDG Corporate Tracker han situado a la sostenibilidad como eje de competitividad, integrando los ODS en modelos de negocio, criterios de inversión y estrategias de impacto. A través de espacios como las Mesas de Acción, el empresariado ha comenzado a dialogar con el Estado y la sociedad civil desde una lógica de co-creación de soluciones. Sin embargo, el alcance real de estas iniciativas aún se concentra en ciertos nichos corporativos, lo que

plantea el desafío de ampliar esta corresponsabilidad al tejido empresarial más amplio, incluyendo pequeñas y medianas empresas con alto potencial territorial.

La academia, reunida en redes como el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), contribuye con investigación aplicada, metodologías de planificación y formación técnica para gobiernos subnacionales. No obstante, su inserción en los espacios de decisión estratégica sigue siendo parcial. El potencial de la academia como bisagra entre evidencia científica y política pública permanece infrautilizado, especialmente en el plano regional.

Por último, la cooperación internacional juega un rol crucial como aliada estratégica, no solo en términos de financiamiento, sino también de fortalecimiento institucional, producción de conocimiento y facilitación de diálogos multiactor. El Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas (2022–2026) y las intervenciones del PNUD, ONU Hábitat y otras agencias han permitido que tanto los Informes Nacionales como los Informes Locales Voluntarios sean procesos participativos y con anclaje territorial. Sin embargo, la programación de la cooperación aún presenta asimetrías, y su capacidad de alinearse plenamente con las prioridades locales está por consolidarse.

Así, el compromiso de los actores no estatales en Perú no puede reducirse a la noción de “apoyo”. Se trata de una forma de corresponsabilidad que ha buscado incidir, institucionalizar y ampliar los márgenes democráticos de la gobernanza para la sostenibilidad. El reto ahora es que esa energía social encuentre un cauce más estructurado y vinculante en el marco institucional del Estado.





### 5.3 TENDENCIAS, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

Perú ha expresado con claridad su compromiso político con la Agenda 2030, integrando los ODS en su visión de desarrollo nacional y en sus principales instrumentos de planificación estratégica. Sin embargo, ese impulso transformador convive con limitaciones institucionales que dificultan su traducción en acciones coordinadas y sostenidas. La ausencia de un órgano con mandato legal específico para liderar la gobernanza de los ODS, la dispersión de funciones entre entidades y los vacíos en la articulación multinivel revelan una arquitectura estatal aún incompleta para sostener el enfoque integral que exige la Agenda. En este contexto, las tendencias observadas en materia de gobernanza, participación y capacidades muestran avances significativos, pero también obstáculos estructurales que es necesario abordar para lograr una implementación efectiva y equitativa.

En el plano de la gobernanza, Perú ha desarrollado una arquitectura normativa y estratégica que formaliza la incorporación de los ODS en sus instrumentos de planificación nacional. CEPLAN, en su rol rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), ha promovido esta integración con liderazgo técnico. No obstante, la ausencia de un órgano nacional con mandato legal específico para la gobernanza de la Agenda 2030 —capaz de articular a ministerios, gobiernos subnacionales y actores sociales— sigue siendo una omisión estructural. La dispersión de funciones entre instituciones y la superposición con otras plataformas sectoriales (como las comisiones climáticas) fragmentan la conducción del proceso, debilitan la rendición de cuentas y diluyen el enfoque integrado de los ODS. Se recomienda institucionalizar un órgano de gobernanza multiactor con atribuciones vinculantes, que supere la dependencia del voluntarismo técnico y garantice sostenibilidad política.







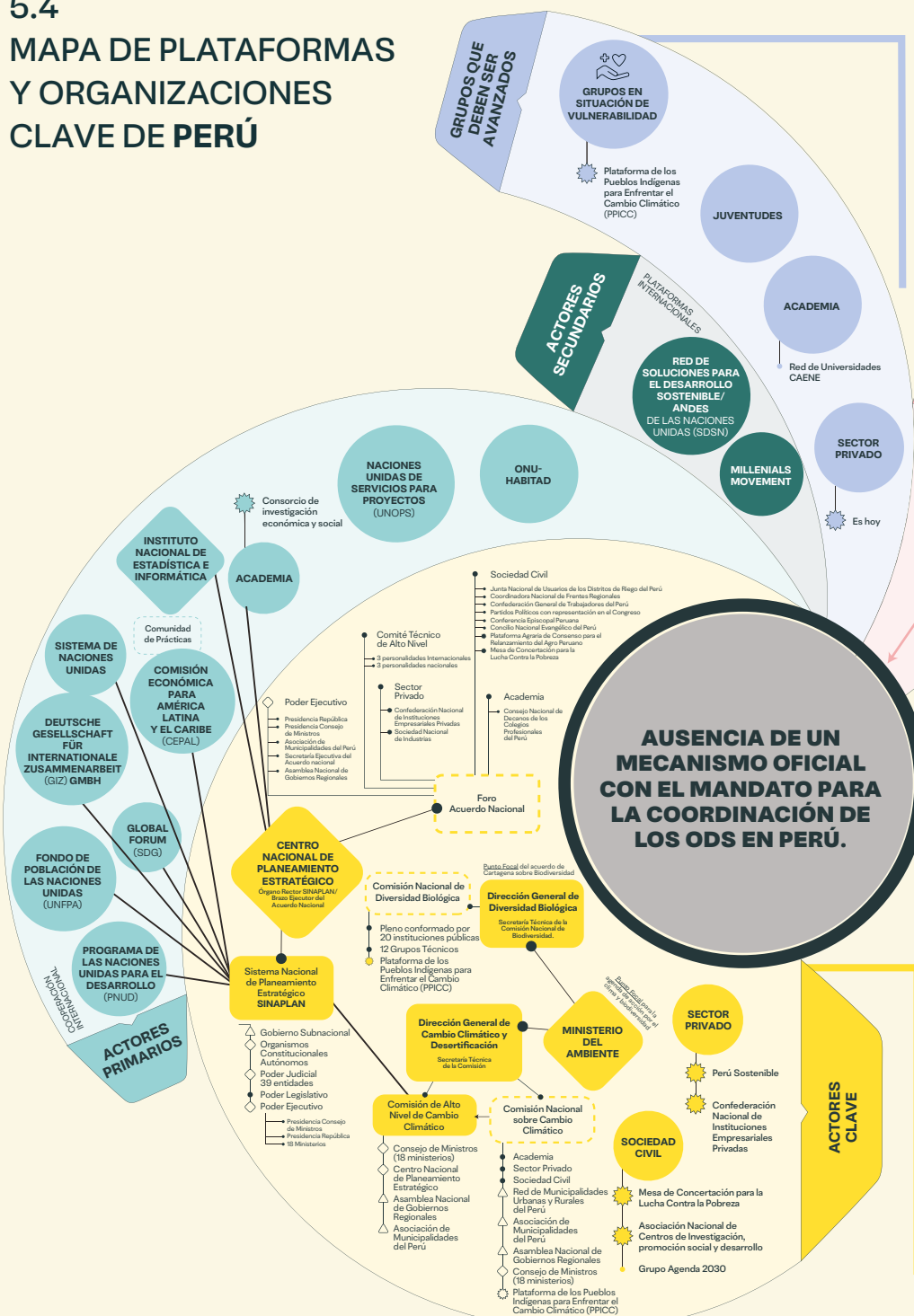
En cuanto a la acción individual y colectiva, Perú cuenta con un ecosistema social diverso y movilizado en torno a la sostenibilidad. La sociedad civil, el sector privado y la cooperación han construido plataformas con capacidad de incidencia y producción autónoma de conocimiento. No obstante, el vínculo entre estos actores y las decisiones estratégicas del Estado continúa siendo limitado, desigual y, en muchos casos, simbólico. Las poblaciones históricamente excluidas —jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, colectivos rurales— siguen teniendo una participación marginal en los espacios donde se define el rumbo del desarrollo. El país necesita transitar de una lógica de consulta puntual a una corresponsabilidad estructural, que institucionalice el diálogo multiactor, reconozca la diversidad territorial y garantice representación efectiva en la planificación y asignación de recursos.

En materia de capacidades, la brecha más significativa sigue estando en los territorios. Si bien se han fortalecido los sistemas de monitoreo estadístico y se han desarrollado plataformas como el SDG Corporate Tracker, la realidad subnacional se caracteriza por la debilidad institucional, la escasez de personal capacitado y la falta de información desagregada. Esta asimetría reproduce un ciclo de dependencia técnica y dificulta la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Las capacidades instaladas en el nivel nacional no se transfieren automáticamente a los gobiernos regionales y locales. Por ello, resulta urgente una estrategia de fortalecimiento con enfoque territorial, que promueva nodos de aprendizaje, formación de puntos focales ODS y articulación con universidades y plataformas comunitarias.

En conjunto, estas tendencias reflejan que Perú no carece de visión, ni de actores comprometidos, ni de marcos normativos adecuados. El desafío es político e institucional: dotar a esa arquitectura de coherencia, continuidad y mecanismos vinculantes que permitan que la sostenibilidad deje de ser una promesa fragmentada y se convierta en una política de Estado arraigada en el territorio.



## 5.4 MAPA DE PLATAFORMAS Y ORGANIZACIONES CLAVE DE PERÚ



### ¿Qué grupos deben ser avanzados?

En Perú se observa una participación multisectorial en la implementación de la Agenda 2030; no obstante, existen plataformas pertenecientes a distintos sectores que no están siendo plenamente incorporadas, aunque su participación podría ser determinante para acelerar el cumplimiento de los ODS.

En este contexto, los pueblos indígenas son reconocidos tanto por su rol como guardianes de la Amazonia como por ser parte de una población históricamente excluida y en situación de vulnerabilidad. Si bien la creación de la Plataforma de los Pueblos Indígenas para Enfrentar el Cambio Climático—impulsada por el Ministerio del Ambiente—y su incorporación permanente a la Comisión Nacional para el Cambio Climático representan un avance institucional, su participación sigue circunscrita exclusivamente a este espacio, lo cual limita su incidencia en otros ámbitos estratégicos de la Agenda 2030.

Los diferentes sectores de la sociedad peruana, incluido el gobierno, reconocen la existencia de grupos opositores de la Agenda 2030, lo que ocasiona reprocesos sobre la sensibilización y procesos de socialización de la Agenda y los ODS.

El Foro del Acuerdo Nacional de Perú es un espacio de diálogo y consenso entre los tres poderes del Estado y los diferentes sectores no estatales de la sociedad. Por consenso el Foro aprobó la alineación de las 35 políticas de Estado a los 17 ODS, la Visión País al 2050 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Este último proporciona un marco de planificación estratégica hacia el desarrollo sostenible; así como las rutas de acción para alcanzar la integración de los ODS en los instrumentos de planificación en todos los niveles del gobierno, políticas, estrategias y marcos financieros nacionales.

El CEPLAN, es el órgano rector del SINAPLAN, el brazo coordinador y ejecutor de los consensos nacionales sobre los temas prioritarios para la nación. Las funciones y obligaciones del Sistema garantizan la transversalización de los ODS a todos los planes estratégicos multianuales, multisectoriales, regionales, locales e institucionales.

De esta manera, el SINAPLAN se convierte en una ventana de oportunidad para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el país. Adicionalmente, el sistema institucionaliza mecanismos nacionales para la participación multisectorial y multinivel, fortaleciendo los instrumentos orientativos del Estado desde un enfoque de toda la sociedad.

### LEYENDA



MECANISMO OFICIAL



ESPACIO DE ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL "ENFOQUE DE TODA LA SOCIEDAD"



ESPACIO DE ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL "ENFOQUE DE TODO EL GOBIERNO"



GOBIERNO GOBIERNO SUBNACIONAL



PLATAFORMA



SECTORES Y GRUPO

VÍNCULOS ESTRECHOS

VÍNCULOS DÉBILES O INFORMALES

TENSIÓN EN LA VINCULACIÓN

### MECANISMO COORDINADOR

Mandato para coordinar, articular y dar seguimiento a la implementación nacional de la Agenda 2030 | Mecanismo permanente.

### ACTORES CLAVE

Participación es indispensable para impulsar acciones | Influencia alta (recursos, alcance territorial, capacidad operativa y de movilización) | Interés en la temática | Interacciones y reconocimiento por otros actores | Miembro, colaborador o participante en espacios del mecanismo oficial de coordinación.

### ACTORES PRIMARIOS

Participación puede ser temporal/adhoc | Influencia media (toma de decisión limitada) | Interés en la temática | Reconocidos por su sector y/o por actores clave del ecosistema como un aliado estratégico.

### ACTORES SECUNDARIOS

Participación puede ser temporal/adhoc | Interés en la temática | Puede tener baja influencia a nivel nacional.

### GRUPOS QUE REQUIEREN SER AVANZADOS

Participación limitada o nula | Sin atribuciones o funciones específicas en la temática | Grupos en situación de vulnerabilidad | Puede (o no) tener interés en la temática | Requieren fortalecimiento de capacidades, información o acompañamiento.

### DETRACTORES

Se oponen o generan obstáculos a la implementación de la Agenda 2030.



# Reflexiones sobre retos y recomendaciones en la región

En la región se observa el uso de las palancas<sup>11</sup> y aceleradores<sup>12</sup> definidos en el Marco Transformador del *Global Sustainable Development Report*. La mayoría de los países han alineado sus prioridades nacionales con los ODS, institucionalizando estrategias, estableciendo mecanismos de coordinación y creando marcos normativos orientados al desarrollo sostenible. Sin embargo, este compromiso no se traduce automáticamente en capacidad operativa en los territorios, ni en esquemas sostenidos de corresponsabilidad entre los diversos actores.

<sup>11</sup> Las palancas del Marco Transformador del GSDR son áreas estratégicas de intervención que permiten acelerar cambios sistémicos hacia el desarrollo sostenible. Son cinco: gobernanza, economía y finanzas, acción individual y colectiva, ciencia y tecnología, y desarrollo de capacidades. Estas palancas se utilizan en combinación, según el contexto, para generar transformaciones estructurales y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.

<sup>12</sup> Los aceleradores de los ODS son combinaciones contextualmente adaptadas de las palancas del Marco Transformador del GSDR, diseñadas para catalizar cambios sistémicos y avanzar más rápidamente hacia la Agenda 2030. El [estudio](#) basado en experiencias reportadas a las Naciones Unidas identificó nueve aceleradores recurrentes: planificación integrada; articulación multiactor; enfoque en poblaciones excluidas; fortalecimiento institucional; conexión entre niveles local y global; liderazgo político; estrategias de concienciación; monitoreo y evaluación; y soluciones culturales o indígenas. Cada acelerador moviliza múltiples palancas —como gobernanza, acción colectiva, capacidades, ciencia y financiamiento— en interacción, demostrando que el progreso sostenible se acelera cuando estas se combinan estratégicamente.





## SOBRE LA GOBERNANZA

Una de las tendencias comunes en la región es la consolidación de marcos de planificación a nivel nacional y subnacional que integran los ODS. No obstante, persiste una brecha significativa entre la planificación central y su expresión efectiva en los territorios. Experiencias relevantes como los Informes Locales Voluntarios, las redes municipales y la integración de los ODS en planes de desarrollo territorial evidencian avances, pero aún son iniciativas puntuales, condicionadas por recursos externos, ciclos políticos o voluntad política. Los marcos habilitantes existen, pero no bastan por sí solos para garantizar acceso a capacidades, financiamiento y articulación interinstitucional efectiva entre los diferentes niveles de gobierno.

### Recomendación

Avanzar hacia esquemas de gobernanza que institucionalicen la participación de actores locales, fortaleciendo la corresponsabilidad. Esto puede lograrse mediante el fortalecimiento de mecanismos existentes y la creación de mesas temáticas multiactor que operen con autonomía relativa y enfoques interseccionales. La inclusión del poder legislativo como actor activo —a través de comisiones o subcomités especializados— puede contribuir a garantizar continuidad más allá de los ciclos políticos y reforzar la coherencia normativa. Experiencias como la Comisión de Alto Nivel y la Plataforma Multiactor de Colombia, la Comisión Nacional para los ODS en Brasil —reinstalada en 2023 con paridad entre gobierno y sociedad civil—, y la Secretaría de la Visión 2030 Jamaica, en conjunto con la Secretaría de los ODS en Jamaica demuestran el potencial de estas instancias para articular la acción junta cuando cuentan con el compromiso político, el respaldo institucional y la estabilidad operativa.



## SOBRE LA ACCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA

Todos los países establecen espacios formales con el mandato de articular la colaboración multiactor. A nivel nacional, estas instancias tienden a estar más consolidadas y permiten cierta interlocución entre Estado, sociedad civil, sector privado, academia y cooperación internacional. No obstante, en el ámbito subnacional, la participación continúa siendo desigual, fragmentada y, en muchos casos, limitada por la escasa capacidad técnica e institucional. La inclusión de grupos históricamente marginados —como pueblos indígenas, juventudes, comunidades afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad— sigue siendo incipiente y requiere esfuerzos específicos en términos de marcos normativos, asignación presupuestaria y diseño institucional con enfoque de derechos.

### Recomendación

Para ampliar la acción colectiva, es necesario diversificar y vincular estructuralmente a los actores sociales y económicos en los procesos de planificación, monitoreo y seguimiento de la Agenda. Esto implica no solo facilitar el acceso a información estratégica, sino también fomentar la creación de alianzas autónomas entre actores diversos, en especial en territorios históricamente rezagados. En Brasil, por ejemplo, plataformas sombrilla como el GT Agenda 2030 y la Estrategia ODS han sostenido el trabajo técnico y de monitoreo en ausencia de respaldo gubernamental, y han creado redes de incidencia en todo el país. En Costa Rica, la Red de Cantones por los ODS desarrolla una experiencia con buenos resultados en el proceso de territorialización de los ODS, lo que se evidencia, también, en la presentación de seis Informes Locales Voluntarios. De igual manera, con el apoyo de la cooperación internacional, Perú aporta aprendizajes relevantes: a nivel subnacional, municipalidades como las de Nuevo Chimbote, Chimbote y Lima han incorporado explícitamente los ODS en sus planes estratégicos territoriales, alineándolos con la Agenda 2030 y evidenciando un compromiso institucional con la sostenibilidad urbana.





## SOBRE LAS CAPACIDADES

Las brechas en capacidades constituyen un desafío transversal en todos los países. Aunque existen instituciones técnicas y experiencias acumuladas en algunos niveles, las desigualdades entre sectores, regiones y escalas de gobierno siguen limitando la efectividad de la implementación. La sostenibilidad del proceso depende de la capacidad de cerrar estas brechas mediante formación continua, asistencia técnica y mecanismos de transferencia de conocimiento. Sin capacidades instaladas en el territorio, la Agenda 2030 corre el riesgo de permanecer en el plano declarativo.

### Recomendación

Se requiere implementar programas regionales y nacionales de fortalecimiento institucional, con enfoque territorial y diferencial. La consolidación de ecosistemas de datos accesibles, el desarrollo de metodologías participativas y la institucionalización de procesos formativos intersectoriales deben concebirse como condiciones necesarias para garantizar transformaciones reales y sostenibles. Países como Jamaica han avanzado con programas de fortalecimiento a gobiernos locales, como el proyecto “Fortalecimiento del rol del gobierno local como socio en el desarrollo”, en colaboración con la Comisión Europea.

## RECURSOS ALINEADOS CON LOS ODS

La región muestra un compromiso progresivo con la integración del financiamiento para el desarrollo sostenible en las estrategias nacionales vinculadas a los ODS, aunque con distintos niveles de avance y sistematicidad. En el caso de Colombia, destaca la formulación e implementación del Marco Nacional de Financiamiento Integrado (INFF), que articula metas fiscales, presupuestarias y de cooperación internacional con la Agenda 2030. Este proceso ha contado con el respaldo del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Joint SDG Fund), creado en 2019 por las Naciones Unidas para catalizar transformaciones estructurales a través de alianzas y financiamiento estratégico.

Colombia fue uno de los primeros países en desarrollar su INFF con apoyo técnico y financiero del PNUD, ONU Mujeres y UNICEF, en un programa conjunto vigente entre 2020 y 2022. A partir de agosto de 2024, se dio continuidad a esta iniciativa con una segunda fase financiada nuevamente por el Fondo Conjunto para los ODS, con énfasis en operacionalizar el INFF y fortalecer el entorno habilitante para el financiamiento sostenible. Esta experiencia da cuenta de la importancia de mantener activos mecanismos de financiamiento para el desarrollo a partir de la cooperación interinstitucional, y fondos específicos que permitan alinear el presupuesto público y otros flujos financieros con las metas de desarrollo sostenible.

### Recomendación

Institucionalizar marcos de financiamiento para el desarrollo sostenible que integren la Agenda 2030 en el ciclo presupuestario, los sistemas fiscales y la arquitectura de cooperación internacional. Esto implica no solo etiquetar presupuestos con metas ODS, sino también diseñar fondos específicos y mecanismos híbridos (público-privados) que canalicen recursos hacia iniciativas estratégicas. El ejemplo del Marco Nacional Integrado de Financiamiento (INFF) colombiano demuestra que es posible construir estrategias financieras integradas y participativas. A su vez, se sugiere promover instrumentos financieros innovadores como bonos verdes, fondos de impacto o líneas de crédito alineadas con los ODS. En el caso peruano, experiencias como el SDG Corporate Tracker y la Ley de Sociedades BIC (Beneficio e Interés Colectivo) pueden escalarse como modelos de involucramiento del sector privado en el financiamiento del desarrollo.



Estas experiencias muestran que existen condiciones y capacidades para avanzar en una implementación más eficaz y equitativa de la Agenda 2030. La articulación de las palancas referidas en el Marco Transformador del *Global Sustainable Development Report* (2023) puede catalizar cambios estructurales si se acompaña de voluntad política sostenida, inversión pública alineada, marcos institucionales que garanticen la continuidad de los procesos más allá de los ciclos políticos y mecanismos de coordinación que reconozcan la diversidad territorial como punto de partida para construir soluciones compartidas

